

**DROGAS Y ACCIÓN COLECTIVA: NUEVAS IDENTIDADES E
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DISCURSO HACIA EL CAMBIO DE
PARADIGMA FRENTE CONSUMO DE DROGAS EN COLOMBIA**

OSCAR SALGAR LOZANO

**Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas – Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (IEPRI)
Bogotá, Colombia
2015**

**Drogas y Acción Colectiva: Nuevas identidades e institucionalización del discurso
hacia el cambio de paradigma frente consumo de drogas en Colombia.**

Oscar Salgar Lozano

Tesis, o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para

Optar al título de:

Magister en Estudios Políticos

Director:

Andrés López Restrepo

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Políticos y

Relaciones Internacionales –IEPRI–

Bogotá, Colombia

2015

Resumen

Tras los fracasos de la política antidroga nacen nuevas miradas que proponen alternativas al paradigma de la prohibición del consumo. En Colombia la sociedad civil organizada ha generado repertorios de lucha en torno a los derechos de los usuarios de drogas, principalmente de cannabis, por medio de la movilización social y procesos sociales de construcción de identidad desde la base de la sociedad. Así mismo otros sectores inspirados en la reducción del daño como enfoque en salud pública emprenden acciones con la institucionalidad estatal colombiana y la cooperación internacional tendientes a crear nuevos marcos de significado en torno a las políticas que regulan el consumo de drogas y las interacciones que se construyen con su uso. Ambas formas comportan lo que denominamos posprohibicionismo, sin embargo los recursos, el capital social necesario para emprender las luchas y las oportunidades políticas serán determinantes para lograr sus objetivos, poniendo en juego las posibilidades de creación de identidad en los movimientos.

Palabras clave: Drogas, acción colectiva, movimientos sociales, recursos, identidad, reducción del daño, marihuana, oportunidades políticas, campo, políticas de drogas.

Abstrac

Following the constant failures of drug policy, the paradigm of drug use and its prohibition has begun to be seen from a different angle. In Colombia, the organized civil society has developed a long argumentative repertoire towards drug users' rights, mainly cannabis consumers. It has been carried out through manifestations of social mobilization, and by social processes of identity construction coming from society's base and roots. Consequently, other societal sectors whose focus is to reduce risks and harm in public health have taken actions with the Colombian state institutionally and international bodies. Shifting focus on creating a new definition framework that surrounds the politics that regulate drug use, and the bi-products of its use. Both forms are determined as 'post-prohibitionism'. Although resources, the required social capital

to face the challenges, and the political opportunities are determining in order to reach its goals - risking the possibilities of creating clear movement identities.

Key words: Drugs, collective action, social movements, resources, identity, harm reduction, marijuana, political opportunities, field, drugs policies.

Tabla de contenido

Introducción.....	6
1. La prohibición de las drogas y sus detractores	15
1.1 Origen legal de la prohibición de drogas en el mundo	15
1.2 La prohibición del consumo de drogas en Colombia	18
1.3 Actores institucionales frente a la prohibición.....	24
2. Acción colectiva y tecnocracia: Lecturas críticas al paradigma de la prohibición del consumo de drogas.....	29
2.1 Acción colectiva institucional: salud pública, oportunidades políticas y tecnocracia	33
2.2 Acción colectiva de base: uso y consumo en la construcción de identida.....	48
3. Movimientos sociales y sus determinantes: El rol de la generación de identidad y las formas de capital en el campo de las políticas de drogas.....	64
3.1 Encuentros y desencuentros del activismo: miradas y posición social de la acción.....	64
3.2 ¿Movimientos sociales?: dilemas y desencantos del activismo en Colombia.....	68
Conclusiones	81
Bibliografía.....	86
Anexos.....	91

Introducción

La prohibición de drogas¹ es el conjunto de disposiciones históricas, sociales, económicas jurídicas y culturales que restringen la producción, comercialización, adquisición y uso de ciertas sustancias que poseen propiedades estupefacientes, fundamentado en la lógica de que estas son nocivas y peligrosas para la salud pública con lo cual se busca evitar su consumo y abuso por medio de la criminalización de su producción, comercialización, y en ciertos casos, su consumo². Algunos de sus aspectos históricos se remontan a comienzos del siglo XIX donde principalmente en Europa se promovía el cultivo de tabaco, café, té, chocolate y coca además de otras drogas que en la actualidad son ilegales, las cuales se convirtieron en productos muy cotizados y lucrativos por los impuestos que generaba su comercialización. Sin embargo las élites a comienzos del siglo XX empezaron a tomar conciencia de los riesgos del consumo abusivo de drogas y se establecen restricciones y prohibiciones. Este proceso fue gradual; sin embargo se constituyó en una potente fuerza política internacional que cambiaría drásticamente la historia.

En la sociedad occidental las políticas de drogas han estado influenciadas por la llamada “guerra contra las drogas” impulsada a comienzos de los años 70 por el presidente norteamericano Richard Nixon, que mediante el uso del derecho penal y el uso de la fuerza pretendió eliminar toda la oferta y la demanda de drogas castigando a todas las personas involucradas en la fase del negocio, es decir, tanto a productores y distribuidores como a consumidores.

Uno de los problemas fundamentales del prohibicionismo es la contradicción entre el consumo de drogas como un asunto de salud pública y la criminalización de la producción, comercialización y consumo. Si bien el fundamento de la prohibición es la

¹ Entenderemos por droga toda sustancia de origen natural o sintético que se introduce en el organismo sin una prescripción médica con la intención de alterar la percepción, la conciencia o cualquier estado psicológico (Fazey, 1998).

² Uprimmy, Guzman y parra. “Penas alucinantes. La desproporción de la penalización de las drogas en Colombia”. Dejusticia. 2013 Pág. 20

defensa de la salud pública, en la medida que las políticas de drogas han recurrido a la prohibición penal han generado un mercado prohibido de narcotráfico y por ende de poderosas mafias. Analistas como Louk Hulsman (1987) o Etham Nadelman (1992) distinguen los “problemas primarios” ocasionados por el abuso de sustancias psicoactivas y los “problemas secundarios” derivados de las políticas de control sobre el consumo, los cuales han supuesto graves problemas que derivan en mafias y generación de violencia, es decir, los daños ocasionados o derivados de la criminalidad que se organiza en torno al negocio de las drogas no son un problema primario, sino secundario, pues obedece a la prohibición misma y a lo rentable que resulta el negocio como consecuencia de ella, y no a las conductas de cultivar, producir y distribuir ciertas sustancias psicoactivas³, así como consumirlas.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el tratamiento al consumo por vía penal resulta problemático puesto que se criminaliza a los consumidores, estos son estigmatizados y discriminados, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y el sistema judicial. Finalmente, abordar el consumo desde el sistema penal termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios como son el derecho a la salud, información, autonomía personal y la libre determinación⁴. Además los enfoques represivos frente al consumo de drogas no distinguen los diferentes tipos de sustancias y usuarios, por lo tanto, resultan inadecuados para atender los daños ocasionados por consumos problemáticos.

En Colombia, históricamente el prohibicionismo ha sido una constante, sin embargo en los últimos años el país ha experimentado cambios significativos a nivel normativo, pasando de un enfoque eminentemente represivo, a uno que concibe el consumo como un asunto de salud pública. La Política Nacional Para la Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto de 2007, plantea que el fenómeno del consumo debe ser abordado desde prevención, mitigación, superación y la capacidad de respuesta. Las resoluciones ministeriales 1315 de 2006 y 1441 de 2013 definen los criterios de habilitación de

³ Ibid. Pág. 22

⁴ Pérez Correa y Youngers. (Editoras) “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”. CEDD 2014 Pág. 6

servicios de tratamiento de consumos problemáticos y la ley 1566 de 2012 ordena que los asuntos relacionados con el consumo de drogas sean atendidos por el sistema de seguridad social en salud y que los medicamentos necesarios para el tratamiento sean incluidos en los Planes Obligatorios de Salud⁵. Sin embargo, a pesar de los avances en temas de salud, la respuesta estatal frente a los consumidores sigue teniendo limitaciones importantes: aunque el consumo no está penalizado, los usuarios pueden ser criminalizados y recibir penas altas por portar drogas en el marco de un proceso penal con serios problemas de inseguridad jurídica en su fase investigativa y judicial⁶ además de los problemas relacionados con la estigmatización, abuso de la autoridad y por ende, la violación de derechos.

El presente trabajo analiza la trayectoria de dos formas de acción colectiva en las ciudades de Bogotá y Medellín emprendidas en un periodo que va desde mediados de la primera década del siglo XXI a la actualidad, las cuales han tenido tres características centrales: la defensa de los diferentes usos de la marihuana, el activismo orientado hacia la reforma de las políticas de drogas y enfoques en salud pública alternativos al paradigma de la prohibición.

En la exploración sobre las acciones de la sociedad civil organizada frente al consumo de drogas en Colombia las investigaciones son escasas o prácticamente inexistentes. El monopolio de la producción de conocimiento ha estado orientado a asuntos relacionados con el narcotráfico, su dimensión económica, política y el influjo sobre la cultura colombiana, pero no se ha ocupado por documentar la manera como el tratamiento al consumo ha generado nuevas formas de acción que nacen de una lectura alternativa a las políticas represivas del estado colombiano y la comunidad internacional. En consecuencia, se presenta al lector una investigación que pretende aportar nuevos elementos a la discusión sobre los distintos abordajes en materia de drogas.

⁵ Uprimmy, Guzmán, Parra y Bernal. “Políticas frente al consumo de Drogas de uso ilícito en Colombia” en “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”. CEDD 2014 Pág. 83

⁶ Ibíd. Pág. 90

En varias ciudades del país han surgido formas de acción colectiva que se manifiestan abiertamente críticas al paradigma de la prohibición del consumo de drogas. Medellín ha sido una ciudad que ha denotado un nutrido activismo. En sus calles se han movilizado miles de personas consumidoras de marihuana que intentando resignificar sus usos e interacciones defienden esta sustancia ilegal. En el mes de mayo se ha vuelto tradición ver las calles de Medellín atestadas de humo de marihuana, arengas, música, pancartas, discursos y saberes relacionados con la planta, al igual que la promoción de alternativas a la prohibición de su uso y por supuesto estrategias de acción alternativas al tráfico ilegal de la planta como el autocultivo.

Bogotá no ha quedado ajena a este tipo de acciones. A pesar que sus movilizaciones no son tan grandes como en Medellín, sus calles también han presenciado marchas, plantones y concentraciones para la celebración del día de la marihuana. La capital de la república también ha sido el lugar donde otro tipo de acciones han propuesto lecturas alternativas a la prohibición, mediante foros de discusión, acciones en salud pública bajo enfoques orientados hacia la mitigación en el consumo de sustancias psicoactivas y encuentros internacionales sobre políticas alternativas al orden actual.

No sólo en las ciudades de Medellín y Bogotá se presentan acciones relacionadas con el activismo en drogas. De hecho el activismo pro-canabico ha trascendido la esfera local para convertirse en un movimiento que intenta articular esfuerzos en casi todo el país⁷. Sin embargo el presente trabajo abordará únicamente estas dos ciudades como estudios de caso por las siguientes razones: Primero, porque en la ciudad de Medellín la movilización urbana es la mas amplia del país por la cantidad de personas que anualmente se movilizan, además de ser la ciudad con el mayor número de consumidores en el país⁸; y segundo porque en la ciudad de Bogotá no sólo se presenta

⁷ Medellín no es la única ciudad donde hay activismo canábico, ciudades como Cali, Barranquilla, eje cafetero, Bucaramanga, Cauca y Pasto presentan un activismo incipiente, sin embargo son procesos sociales en desarrollo y su número de adherentes no es comparable con el Valle de Aburrá.

⁸ Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia elaborado por el Ministerio de la Protección Social, el Observatorio de Drogas de Colombia y El Ministerio de Salud y de Protección social en el año 2013 Medellín es la ciudad con el mayor número de usuarios de alguna sustancia ilegal en el último año con un 8,2% de la población, mientras que ciudades como Bogotá presentan un 3,5% el cual es el mismo promedio nacional.

la manifestación pública propia del movimiento social clásico, sino además una interacción estratégica con la institucionalidad estatal. En resumen, se evidencian dos formas o enfoques de acción colectiva distintos: la de base e institucional.

Las dos formas de acción poseen algo en común, una lectura crítica a la prohibición de drogas en Colombia y las políticas que la regulan. Sin embargo, sus formas de acción son distintas. La acción colectiva de base es predominantemente comunitario, simpatizante con el consumo de marihuana, su discurso se fundamenta en la planta, la descriminalización del usuario y la normalización del consumo. La acción institucional por su parte, se caracteriza por entablar un diálogo con la institucionalidad estatal, conciben el problema del consumo como un asunto de salud pública y buscan la obtención de recursos del estado con el propósito de materializar acciones en reducción de riesgo y mitigación de daños.

En consecuencia, proponemos analizar dos casos de acción colectiva frente al paradigma prohibicionista. El primero es la Comunidad Canábica Colombiana (CCC) que se asienta en la ciudad de Medellín, su principal característica es que quienes la componen, son consumidores activos de marihuana y están organizados en torno a la defensa de su consumo, sus diferentes formas de uso y lo que ellos denominan “la pedagogía del uso de la planta”. Uno de sus principales modos de acción son las marchas, las manifestaciones públicas y la generación de espacios culturales orientados a defender los derechos de los consumidores. Esta organización cuenta con una escasa interlocución estatal y su vocación es de trabajo comunitario, este lo llamaremos acción de base o comunitaria. El segundo caso es Acción Técnica Social (ATS) corporación que tiene su epicentro en la ciudad de Bogotá, compuesto por profesionales de las ciencias sociales en su mayoría, la cual aborda el consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública y cuyas acciones se enmarcan en la generación de estrategias de reducción de riesgos y mitigación del daño, por ende lo denominaremos acción institucional.

Teniendo en cuenta que hay marcadas diferencias en los modos de activismo, así como en los métodos y maneras de entender y abordar la acción, para efectos de la presente investigación, se parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo son los modos de acción colectiva opuestos al paradigma de la prohibición del consumo de drogas en las ciudades de Bogotá y Medellín y de qué manera los medios y los ámbitos de acción determinan el nivel de efectividad para la consecución de los fines propuestos entre mediados de la primera década del siglo XXI y la actualidad?

Así las cosas, se hace necesario hacer una inmersión en las distintas formas de acción que se oponen al paradigma de la prohibición del consumo, determinar si son perceptibles cambios en la orientación de las políticas sobre consumo de drogas o si, por el contrario, la acción colectiva no trasciende de la euforia de la movilización. Frente a estos cuestionamientos proponemos la siguiente hipótesis de investigación: A mayor interlocución estatal, mayor es la obtención de recursos y apertura a oportunidades políticas de generar cambios en el paradigma de la prohibición, sin embargo dicha apertura pone en riesgo la identidad del activismo.

Teóricos como Touraine, Melucci y Tarrow sirvieron como referentes teóricos para la reflexión, de ellos consideramos importante revisar algunas referencias conceptuales sobre movimientos sociales y acción colectiva, conceptos centrales en la presente investigación. Para Touraine (2006) acción colectiva es un conjunto de actos que en un momento determinado reúnen una variedad de actores, no siendo toda la acción un resultado de un movimiento social. En otras palabras, la acción colectiva no sería necesariamente un movimiento social. Mientras que para este mismo autor, un movimiento social es una “conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta”. Para Melucci (1987) es una forma de acción colectiva que invoca solidaridad, manifiesta un conflicto y conlleva a una ruptura de los límites de compatibilidad con el sistema dentro del cual la acción tiene lugar. Finalmente para Tarrow (2004) el movimiento social es un desafío colectivo planteado por personas que comparten

objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades.

Una de las principales dificultades halladas en el proceso de recolección de información radicó en que las formas de acción colectiva formalmente constituidas son relativamente recientes, por lo que constituyen un fenómeno poco estudiado y no existen documentos, estudios o artículos académicos que permitan hacer un estado del arte previo. Ante esta situación fue necesario entablar un diálogo directo con los principales actores y líderes de las organizaciones para recolectar sus experiencias y opiniones.

La metodología empleada para la obtención de la información fue variada y de carácter cualitativo. En primera instancia empleamos la observación participante en múltiples manifestaciones, que por medio de la etnografía sirvieron de primer acercamiento a discursos, actores y repertorios de lucha. Estas primeras interacciones nos permitieron entender que para mantener el compromiso por largos periodos de tiempo eran necesarias acciones que fuesen más allá de la alteración del orden público y las manifestaciones. Por lo tanto la observación participante cumple la función de describir de manera detallada las acciones desplegadas por las organizaciones y los procesos en marcha. Sin embargo, fue necesaria una descripción más profunda al interior de las organizaciones, delimitar por quiénes estaban compuestas y cuáles eran sus perfiles y finalmente indagar acerca de cómo le asignan significado al fenómeno del consumo de drogas, la prohibición de las mismas y la organización social. Por lo tanto se procedió a contactar a los líderes de las organizaciones por medio de la técnica de entrevista.

La principal ventaja de la entrevista es que permite con cierto grado de profundidad, indagar acerca de las motivaciones que impulsan a los actores a movilizarse. En el caso de la acción colectiva canábica, es importante resaltar cómo esta técnica permite develar las estructuras de significado asociadas al uso del cannabis y la manera como este determina la acción colectiva, cuáles son los repertorios de acción, cómo se emplean los recursos para llevar a cabo la movilización y cuáles son las identidades que se construyen al ser militante. En la indagación con la acción colectiva institucional

sucedió algo similar. La técnica de la entrevista a profundidad permitió conocer su historia, la manera como son obtenidos los recursos, las alianzas que se crean con diferentes actores institucionales y las pretensiones que se persiguen con la movilización, al igual que los enfoques en salud pública. Sin duda esta técnica se constituyó en una de las principales herramientas para la recolección de la información por la veracidad de las fuentes y el acercamiento directo con el objeto de investigación.

El análisis de fuentes secundarias también fue de especial importancia. Dado que el fenómeno de la movilización social en materia de drogas no ha gozado de un cubrimiento significativo en medios de comunicación (en la mayoría de los casos los principales medios han cumplido con la función de cubrir algunas manifestaciones, principalmente aquellas donde hay una afectación del orden público). La revisión y análisis de redes sociales fue una importante fuente de recolección de información ya que es uno de los principales medios para la difusión de los movimientos, adicionalmente pudimos identificar que ambas formas de acción recurren de manera constante a ellas como medio para difundir sus discursos, promover eventos, convocar a los manifestantes y denunciar situaciones consideradas injustas en los ámbitos políticos y sociales.

El desarrollo del presente trabajo de investigación se divide en 3 capítulos. El primero está dedicado a la prohibición de las drogas en el país y en el mundo, entregando una visión general del paradigma de la prohibición desde la Convención del Opio en Shanghái en el año 1909 hasta la década de los 90 donde las Naciones Unidas sientan las bases de lo que hasta la actualidad ha sido el prohibicionismo. Igualmente se pretende dar un panorama de lo acontecido en Colombia en los últimos 20 años respecto al tema de la dosis personal, ya que esta guarda una relación directa con el objeto de estudio. Finalmente se presenta un recuento de las principales voces que en el país y Latinoamérica se han mostrado reticentes a continuar con una lucha antidrogas cuyo fracaso está suficientemente documentado.

El segundo capítulo es una descripción detallada de los dos casos propuestos para el análisis, allí se realizará la reconstrucción histórica de cada uno de ellos, además de una descripción etnográfica en el caso de la Comunidad Canábica Colombiana, sus principales actores, trayectorias, discursos y los procesos de generación de identidad los cuales pretenden ser explicados y analizados a la luz de algunas teorías sobre movimientos sociales consideradas pertinentes.

El tercer y último capítulo tiene como propósito principal el análisis general de los casos estudiados, intentando caracterizar los resultados de la acción así como los condicionantes sociales que posibilitan o no, la efectividad de las trayectorias de lucha expuestas con antelación. Resulta aquí central observar los encuentros y desencuentros de los casos estudiados y la posibilidad o no de hablar de estas formas de acción colectiva como movimientos sociales.

Se espera que la lectura de las líneas que vienen a continuación contribuyan a alimentar el debate y las reflexiones que suscita un tema de renovada importancia para la realidad nacional teniendo en cuenta los fracasos de la actual política de drogas. Por otra parte cabe resaltar el interés por aportar nuevos elementos sobre el fenómeno de las drogas que surgen desde otros actores, los cuales a su vez, generan otros marcos de significado. En parte este trabajo está inspirado en aquellos que consideran la acción colectiva organizada, un vehículo para la transformación de sus propias realidades. A ellos está dedicado.

1. La prohibición de las drogas y sus detractores

Durante prácticamente todo el siglo XX el consumo de drogas ha estado prohibido en casi la totalidad del planeta. El afán de las sociedades por establecer controles sobre los comportamientos individuales que se consideran nocivos o inmorales ha sido fundamento de la prohibición de las drogas. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad las sustancias que alteran la conciencia ocupan un lugar en la vida de las personas en amplios márgenes de uso: han sido utilizadas como instrumentos para comunicarse con los espíritus, para hacer magia, como parte de ceremonias religiosas, como medicamentos, para facilitar la comunicación social, como instrumentos recreativos y de escape de la realidad, para distraer el tedio en los trabajos solitarios y rutinarios, para aumentar la productividad, como determinantes del status (Escohotado, 1998).

Antes de 1909, el uso de drogas era un asunto local, regulado internamente por cada uno de los estados. Sin embargo, posteriormente se crea un sistema de control que debía ser acogido por todos los estados bajo una idea simple: cuando el mercado era local, cada sociedad podía tener sus propias formas de control, lo que hoy en día es imposible a causa de las interacciones comerciales y culturales del sistema mundo. El mercado de drogas hoy es global y tiene repercusiones trasnacionales, lo que exige una normatividad global (Thoumi, 2009).

1.1 Origen legal de la prohibición de drogas en el mundo

La normatividad internacional que soporta el paradigma prohibicionista tanto para el consumo como para la producción de drogas, tiene su sustento en varias comisiones y convenciones. La primera de ellas es la Comisión internacional del opio en Shanghái de 1909, convocada por los Estados Unidos con el propósito de regular el comercio internacional de opio (Thoumi y Jelsma, 2008). Este es el primer intento de alcance internacional por controlar el consumo de narcóticos. Uno de los principales temas

puestos sobre la mesa fue darle a las drogas sólo usos médicos, penalizar el porte del opio y prohibir su venta a personas no autorizadas.

La Convención Internacional del Opio fue firmada en la Haya el 23 de enero de 1912 donde los Estados Unidos convocaron a las 13 naciones de la Comisión Internacional del opio en Shanghai. Este tratado fue firmado por Estados Unidos, Francia, China, Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda, Japón, Persia, Portugal, Rusia y Siam. Su principal acuerdo consistió en que los países firmantes debían realizar sus mejores esfuerzos para controlar la fabricación, venta, distribución, importación y exportación de morfina y cocaína con sus respectivos derivados. Para el año de 1915 esta legislación se hizo efectiva en los Estados Unidos, Honduras, Noruega, China y Holanda. Y en 1919 tuvo validez mundial al ser incorporada en el Tratado de Versalles.

Hacia 1931 en Ginebra se firmó la convención para limitar la manufactura y regular la distribución de drogas narcóticas, donde los países productores debían informar el tamaño de los cultivos de coca y de amapola presentes en sus territorios. Así mismo en 1936 se firma en Ginebra la convención para suprimir el tráfico de drogas ilícitas y se realiza por primera vez la solicitud de imponer castigos severos a los traficantes de drogas no permitidas. Posterior a la segunda guerra mundial, las Naciones Unidas asumen la responsabilidad y las funciones del control de las drogas ilícitas (Thoumi y Jelsma, 2008). En 1948 se firma un protocolo en París en el que se incluyen algunas drogas sintéticas dentro de la convención de 1931. Hacia 1953 se regula en mayor medida la producción de la adormidera y la producción, comercio internacional y consumo de opio, con el propósito de eliminar la sobreproducción de esta droga por medio del control de las cantidades que cada estado podía poseer. Es importante anotar que solo 7 países podían producir opio para exportación: Bulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía, Yugoslavia, y la antigua Unión Soviética.

Sin embargo es hasta 1961 con la convención única sobre estupefacientes cuando se consolida una normatividad de alcance internacional donde los usos de drogas sintéticas como el MDMA o el ácido lisérgico son restringidos al uso exclusivo de la

medicina y la investigación científica. Estos cambios impulsados principalmente por grupos religiosos y sectores de la salud, pretendían perseguir los usos de drogas con fines recreativos, religiosos o sociales. Esta convención, a su vez, creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) cuya función principal es supervisar el cumplimiento de la normatividad internacional vigente y creó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta normatividad desconoció toda la historia humana en la que varias civilizaciones y culturas le dieron uso a fármacos de manera controlada. Además se prohibieron todas las droga sin distinción y se propuso tratar a todos los usuarios de estas por igual, lo cual generó un amplio debate mundial, que aún persiste.

En 1988 se firma la convención de Viena de las Naciones Unidas, la cual se desarrolla entendiendo el narcotráfico como una forma de organización criminal trasnacional, por lo que centró sus discusiones en el control del tráfico de drogas y obligó a todos los países suscritos a penalizar todos los aspectos relacionados con el tráfico ilícito, como lo son el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, el lavado de dinero y exhortó a las autoridades competentes de cada estado a dichas actividades como delitos graves (Jelsma, 2003).

En 1990 la asamblea general de la convención de Viena aprueba un programa global de acción anunciando que los 90 serían la década de las Naciones Unidas contra el uso indebido de drogas. En 1991 se crea el programa de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de las drogas (PNUFID). Sin embargo, la prohibición es puesta en controversia desde la postura crítica de varios países como México, Dinamarca, Australia, Canadá y España quienes advierten de los fracasos de la lucha contra las drogas, proponiendo un replanteamiento orientado hacia el ablandamiento con la represión al consumo. Francisco Thoumi establece que 1993 fue el año de la presentación en sociedad de la tendencia consolidada bajo el estandarte de la reducción del daño. Así mismo, países del área Andina como Perú y Bolivia defendieron el uso de la hoja de coca en sus países y se presentaron desde la Organización Mundial de la

Salud (OMS) propuestas para evaluar el costo y las ventajas de la reducción del daño así como la posibilidad de la despenalización del consumo.

El PNUFID designó un grupo consultivo especial e intergubernamental asesorado por el presidente de la JIFE con el propósito de que este formulara recomendaciones sobre los cambios que deberían efectuarse en la lucha contra las drogas. Este grupo representó a México, Estados Unidos, India, Argentina, la Federación de Rusia, Suecia, Polonia, Japón, Egipto y Nigeria donde se recomendó al PNUFID proporcionar argumentos sólidos contra la legalización del uso de estupefacientes con fines no terapéuticos así como realizar un estudio sobre las implicaciones de la despenalización y de las campañas de reducción del daño. El grupo finalmente reconoció que las estrategias de reducción de la demanda serían convenientes si se creaba un sistema sanitario público que reconociera los peligros de otras sustancias como los disolventes volátiles, esteroides anabólicos y sustancias legales como el alcohol y el tabaco. La Comisión de estupefacientes de 1995, al igual que la INTERPOL y los Países Bajos cuestionaron la validez de las estrategias empleadas en la lucha contra las drogas. Sin embargo se mantuvo una fuerte oposición a la legalización del uso de drogas con fines no terapéuticos ya que iba en contra de los tratados internacionales y sería un grave revés en la cooperación internacional en materia de fiscalización de drogas (Thoumi y Jelsma, 2008). Actualmente a pesar de los múltiples debates y escenarios internacionales en los que se discute la efectividad del enfoque prohibicionista y se plantean otras alternativas, la prohibición de las drogas en el mundo continúa siendo una realidad.

1.2 La prohibición del consumo de drogas en Colombia

Colombia no es ajeno a la realidad de la prohibición de las drogas en el mundo. El hecho de ser un país productor lo convirtió en el aliado número uno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, mas que preocuparnos por la prohibición de la producción centraremos los esfuerzos en reconstruir los sucesos relacionados con la prohibición del consumo en el país.

Diferentes gobiernos locales y nacionales en el continente Sur Americano y en Europa han despenalizado, legalizado, normalizado o regulado el consumo de drogas (Uruguay, Brasil, Holanda, Portugal, Guatemala, Canadá, Luxemburgo entre otros). Colombia lo hizo en el año de 1994 con la polémica sentencia C-221 de la Corte Constitucional que despenalizó el porte y el consumo de dosis personales de drogas ilícitas al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 51 y 87 del Estatuto Nacional de Estupefacientes (ley 30 de 1986). El principal argumento consiste en que la penalización de la dosis personal viola el derecho al desarrollo de la libre personalidad (Artículo 16 de la Constitución). Argumentó la Corte, además, que la autonomía personal prima siempre y cuando no se incurra en daños a otros. Sin embargo la sentencia no despenalizó la venta de drogas, por el contrario, estableció una distinción entre el portar para consumir y el portar para vender o comercializar, donde la dosis personal se refirió a una cantidad específica de drogas ilegales: 20 gramos de marihuana, 5 gramos de hashis, 1 gramo de cocaína, 1 gramo de bazuco y 2 gramos de metaqualona.

Sin embargo la sentencia no fue bien recibida por el gobierno del entonces Presidente Cesar Gaviria, quién había sido elegido como sucesor de Luis Carlos Galán, luchador contra el narcotráfico y asesinado por las mafias. El gobierno al conocer la sentencia amenazó con convocar a un referendo para derogar la sentencia de la corte, la cual consideraba un grave error dada la guerra contra el cartel de Medellín (Lematrie y Albarracín, 2010). Ernesto Samper continuó con esta cruzada en contra de la despenalización de la dosis personal a pesar de ser él quien en años anteriores fuera un defensor de la legalización de la marihuana. ¿La razón? Su gobierno estuvo severamente limitado por el escandalo del “proceso ocho mil” el cual estaba relacionado con la infiltración de dineros ilícitos del cartel de Cali a su campaña electoral.

En el siguiente gobierno, liderado por Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 el tema de la dosis personal no fue notoria en la agenda del ejecutivo por las siguientes razones: Primero, hubo muy poca relación (por lo menos militar) entre narcotráfico y consumo doméstico dado que la preocupación se centraba en la producción y distribución fuera del país; por tanto la despenalización del consumo se había efectuado sin mayores

traumatismos para la guerra contra las drogas. Segundo, la guerra contra los carteles ya no ocupaba la primera plana, en cambio ahora lo hacía el proceso de paz con la guerrilla. Tercero, los cambios en el gobierno de los Estados Unidos con Bill Clinton resultaron de menor intensidad en la guerra contra las drogas. Y por último, el factor mas determinante fueron las buenas relaciones del gobierno de Pastrana con Clinton para el desarrollo del Plan Colombia. Si bien el plan tenía varios componentes sociales, su énfasis era el fortalecimiento de la capacidad bélica del Estado colombiano frente a la exportación de drogas, y tenía poco o ningún interés por el consumo nacional (Lematrie y Albarracín, 2010).

Es hasta el gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) que la despenalización de dosis personal llega a un debate público. Este gobierno enfila sus esfuerzos a penalizar nuevamente la dosis personal mediante varios intentos y estrategias jurídicas, a saber: el primer intento fue en el referendo de 2003, en el cual el gobierno preguntó a la ciudadanía si aprobaba la penalización del consumo en la constitución por medio de una reforma del artículo del libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo la Corte Constitucional declaró el referendo inconstitucional por cuestiones de procedimiento.

El segundo intento se surtió en el segundo periodo de Uribe Vélez. En el proyecto de reforma a la justicia de 2006 se propuso una reforma al artículo del libre desarrollo de la personalidad al que se le incluiría como delito la posesión y el consumo de drogas ilegales. Sin embargo terminó hundiéndose en el Congreso (proyecto de acto legislativo 133 de 2006). La tercera y cuarta iniciativa, propuestas en 2007 se materializaron en dos proyectos de ley independientes. El gobierno planteó nuevamente una reforma constitucional del Artículo 49 (derecho a la salud), reforma que daría sanciones distintas a la cárcel para los consumidores como el tratamiento obligatorio para los adictos (Proyecto Acto legislativo 22 de 2007 y Proyecto Acto legislativo 04 de 2007). Estas tampoco prosperaron dada la poca aceptación en el Congreso de la República a pesar de las mayorías uribistas. El quinto intento fue en el año 2009 cuando se presentó un proyecto de acto legislativo reformativo del artículo del derecho a la salud, proyecto que penalizaba la posesión y el consumo pero que daba la posibilidad de suspender la

sentencia si el condenado aceptaba un tratamiento médico supervisado por cortes especializadas (proyecto de ley 248 de 2010). Finalmente en diciembre de 2009 las buenas relaciones del gobierno con el poder legislativo dieron la posibilidad de reformar el Artículo 49 (derecho a la salud) donde se prohíbe la posesión y consumo pero no establece consecuencias penales ni deja claro qué implica la prohibición, a tal punto que sigue vigente la norma del código penal (Artículo 376) que excluye la dosis personal de la penalización del narcotráfico. Las únicas consecuencias para los consumidores son tratamientos médicos, los cuales no podrán ser obligatorios (Lematrie y Albarracín, 2010).

A pesar de la realidad del triunfo del paradigma prohibicionista en el mundo, persiste un desacuerdo entre ciertas élites intelectuales, políticos y activistas respecto a la efectividad y la pertinencia de este enfoque. Si bien son miles de millones de dólares los que se invierten en la lucha contra las drogas y existen múltiples investigaciones, estadísticas e informes en todo el mundo que muestran los alcances de esta lucha, hay una verdad ineludible, estas políticas han fracasado. Tal fracaso está encarnado en dos niveles, tanto en el consumo como en la producción de drogas. La oferta de sustancias ilícitas es una realidad inocultable. En las calles de las grandes ciudades del mundo es posible adquirir todo tipo de drogas, ya sean de origen natural o sintético a precios elevados principalmente en países desarrollados. Igualmente es falso advertir que los consumidores regulares en el mundo han disminuido, según el informe mundial sobre las drogas de 2014 la UNODC advierte que el consumo de drogas en el mundo ha permanecido estable con cerca de 243 millones de personas usuarias, un 5% de la población mundial entre 15 y 64 años de edad. (World Drug Report 2014 United Nations Office on Drugs and Crime).

La prohibición de las drogas en el mundo causa malestar no sólo por sus limitados resultados frente a la utopía de un mundo libre de drogas, sino porque los costos sociales de una lucha estéril son muy altos y las relaciones entre países productores y consumidores –que coinciden con países en vía de desarrollo vs países desarrollados principalmente en la producción y tráfico de cocaína y heroína– son abiertamente

desiguales. Para los países desarrollados las drogas se han vuelto un problema social y de salud pública, mientras que para las regiones en vía de desarrollo como el área Andina –única productora de cocaína en el mundo– los problemas trascienden a los planos económicos, políticos, sociales y ambientales. En el caso colombiano, según Francisco Thoumi son múltiples los efectos de la industria ilegal: una acumulación de fortunas personales que cambiaron la estructura de poder y la naturaleza de muchas élites regionales en todo el país, bonanzas y depresiones económicas, concentración de la propiedad rural, conflictos con los Estados Unidos, establecimiento de organizaciones paramilitares, fortalecimiento de grupos guerrilleros, aumento notable de la corrupción estatal y de la violencia (Thoumi, 2002).

Los costos para el país en temas de medio ambiente también han sido notables, los bosques tropicales se han visto afectados por la aparición de cultivos ilícitos, así mismo en el proceso de producción de cocaína, pues los campesinos utilizan fuertes herbicidas y precursores químicos que hacen infértil la tierra y contaminan el agua. Finalmente desde las políticas antidrogas las fumigaciones aéreas al igual que otros medios de erradicación han generado una oposición social y política, pues estos no sólo destruyen los cultivos ilegales sino que acaban indiferentemente con los cultivos legales y la flora local, esto sin mencionar los impactos en la salud humana de las aspersiones aéreas (Thoumi, 2002).

Dentro de los efectos sociales y políticos cabe destacar cómo la industria ilegal ha sido el motor principal del incremento de la violencia y la criminalidad en el país, pues esta se relaciona directamente con la presencia de actores armados violentos como narcotraficantes, guerrilleros y grupos paramilitares (Rubio, 1999). Así mismo el aumento de la corrupción política y la inclusión de organizaciones ilegales en la vida política nacional⁹.

⁹ Claros ejemplos al respecto son las relaciones entre narcotráfico y política en el gobierno de Ernesto Samper cuando grabaciones de conversaciones telefónicas revelaron que gran parte de su campaña política fue financiada por dineros del narcotráfico. Al igual que la llamada “parapolítica” en los dos periodos de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe. Donde varios congresistas, todos pertenecientes a su coalición de gobierno, fueron acusados y condenados por tener vínculos con estructuras paramilitares en varias regiones del país.

Para Thoumi, la estructura política colombiana hizo vulnerable al país ante la industria de drogas ilegales (Thoumi, 1994). Los partidos políticos en Colombia no han tenido fuertes ideologías ni organizaciones centralizadas; han sido asociaciones de caudillos cuya función ha sido contribuir con votos (Leal, 1989; Leal y Dávila, 1990). Esto ha influido en la inexistencia de restricciones al comportamiento, dado que no han sido interiorizadas pautas de conducta a partir de ideologías propias de los partidos políticos. Los políticos resultan a su vez “muy baratos” en comparación con la riqueza y los ingresos de los narcotraficantes (Lee III y Thoumi, 1998).

En términos del consumo de drogas, la ilegalidad de estas también ha implicado graves problemas para los usuarios: en cuanto a la dimensión social del problema se estigmatiza a millones de consumidores y se les somete al riesgo de una sanción penal en la mayoría de ocasiones. Se les obliga a establecer relaciones con narcotraficantes para poder comprar drogas de procedencia desconocida, lo cual da lugar al incremento de muertes por sobredosis o envenenamiento (Del Olmo, 1992). Igualmente hay un deterioro de los derechos civiles de los consumidores en tanto son vistos por las autoridades como delincuentes o enfermos.

Los intentos fallidos en la lucha contra las drogas en el mundo, y en particular en Latinoamérica han generado una serie de respuestas que se oponen al actual enfoque prohibicionista. Sus protagonistas hacen parte de diferentes sectores de la sociedad en términos de clases sociales, roles en la sociedad y posiciones políticas. A pesar de que los discursos presentan claras diferencias respecto al qué hacer, cómo hacerlo y cómo mirar el actual problema de las drogas en el mundo, todos los actores tienen algo en común: una acérrima postura crítica ante la prohibición de las drogas.

1.3 Actores institucionales frente a la prohibición

Una de las voces mas nombradas que se oponen al paradigma de la prohibición es la declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en el año 2009 creada por los ex presidentes Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Cesar Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, quienes evaluaron las políticas de drogas y formularon recomendaciones para replantear las estrategias de lucha, las cuales se constituyen como un cambio profundo en el paradigma de comprensión del fenómeno de las drogas en América Latina.

Las principales conclusiones a las cuales llega la Comisión, son: 1) América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas. 2) Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa. 3) Ha habido un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de grupos criminales. 4) Hay un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad, y en particular, a los pobres y los jóvenes 5) Ha proliferado la corrupción de los funcionarios públicos del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político, y en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden (Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009).

Los discursos de los ex presidentes se fundamentan en aceptar los fracasos de las políticas vigentes, reconociendo que es necesario continuar el combate contra los carteles de droga y resaltando la necesidad de reducir drásticamente el daño que producen las drogas a las personas, las sociedades y las instituciones. Para ello proponen diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad. Para la comisión un enfoque en derechos humanos implica reconocer la diversidad de las situaciones nacionales así como priorizar la prevención y el tratamiento. Otro punto importante a resaltar es el planteamiento de la necesidad de

examinar críticamente las políticas prohibicionistas orientadas desde los Estados Unidos y ver las ventajas y los límites de la estrategia de reducción de daños seguida por algunos países europeos.

La propuesta de la comisión tiene tres grandes directrices. Primero, tratar el consumo de sustancias ilícitas como un problema de salud pública. Segundo, reducir los niveles de consumo mediante acciones de información y prevención, y tercero, focalizar la represión sobre el crimen organizado. Para hacer posible el cambio de paradigma la comisión propone una serie de iniciativas: 1) Transformar a los adictos compradores de drogas del mercado ilegal en pacientes del sistema de salud. 2) Evaluar un enfoque de salud pública, y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica, mirar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal bajo el argumento de que la marihuana, considerada una droga blanda, es equiparable en sus efectos físicos y psicológicos al alcohol o el tabaco, por lo tanto su criminalización ha supuesto un encarcelamiento indiferenciado de consumidores incurriendo en la violación de derechos humanos. 3) Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios. 4) Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado y 5) Reorientar las estrategias de eliminación de cultivos ilícitos a través de fumigaciones hacia la adopción de programas de desarrollo alternativos.

Las principales conclusiones a las que se puede llegar respecto a la Comisión es que comienzan a escucharse voces de importantes figuras en Latinoamérica que cuestionan el actual enfoque de la lucha contra las drogas, haciendo un especial énfasis en cómo la ilegalidad alimenta el crimen organizado y prolifera la corrupción estatal y de los funcionarios públicos. Así mismo, es importante resaltar cómo enfoques alternativos al paradigma prohibicionista recalacan la salud pública como un eje transversal a nuevas políticas, sacando al problema de las drogas de los aspectos meramente punitivos.

Además de los casos de la política nacional e internacional donde hay miradas alternativas a la prohibición del consumo de drogas, existen dentro del estado Colombiano respuestas a la problemática del fenómeno prohibicionista del consumo. Aunque no visible desde el despliegue mediático, pero si efectivo en la agenda pública nacional, está uno de los fenómenos relacionados con posturas críticas ante el prohibicionismo en Colombia: se trata de los enfoques desde la salud pública, que si bien se inscriben desde el criterio técnico relacionado con preservar la salud y entienden el fenómeno de las drogas como una cuestión de salud por encima de cuestiones ideológicas, los resultados de sus procesos y de la interlocución con instituciones estatales son materializables en programas, acciones puntuales y financiación, lo que ha permitido que se mantengan en el tiempo y proyecten acciones en dirección opuesta a las propuestas prohibicionistas. Tal es el caso del Ministerio de la Protección Social y los enfoques en mitigación adoptados en la Política Nacional, la cual fue creada en el año 2007 como se verá a continuación.

Una de las luchas que caracterizó al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe fue su posición ante el fenómeno del consumo de drogas y narcotráfico, abiertamente prohibicionista, el cual promovía la penalización de la dosis mínima de drogas. El pretender dar el rótulo de enfermos a todos los usuarios de drogas sin matiz alguno y campañas mediáticas de desprestigio a plantas que son consideradas sagradas para comunidades indígenas como el caso de la “mata que mata” son algunos de los casos más notorios de los esfuerzos de su gobierno por emprender una lucha contra las drogas y sus consumidores. En 5 ocasiones el ex presidente radicó proyectos de acto legislativo o referendo que pretendían eliminar la figura de la dosis personal, logrando por fin en un último intento (el cual se enfocó en entender a los consumidores como enfermos) penalizar la dosis mínima, sin embargo, a la fecha, no ha sido reglamentado y sobre el proyecto pesan demandas por inconstitucionalidad. Lo paradójico es que mientras el presidente, desde el plano político, libraba una lucha franca y abierta contra los consumidores de drogas al considerarlos como los responsables de financiar el terrorismo y la guerra en Colombia, su Ministerio de la Protección Social, tenía otra visión y desarrollaba acciones que iban claramente en detrimento de sus tesis.

Se parte de la necesidad de proteger a la sociedad de la cual hacen parte integral los consumidores de alcohol y otras sustancias, de los riesgos asociados al consumo, pues la evidencia es robusta en mostrar que un sistema legal persecutorio impide a los consumidores acceder libremente y con equidad a los medios que les permitirían prevenir riesgos (...) Una posición pluralista reconoce al consumidor como sujeto promotor y responsable de sus propias condiciones de vida, agente de cambio para sí y para su grupo y, por lo tanto para la sociedad. (Política Nacional Para la Reducción del Consumo de SPA y su Impacto. Ministerio de la Protección Social, 2007, P. 16).

La Política Nacional Para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto planteó un escenario opuesto a las tesis del primer mandatario al proponer como finalidad última reducir la incidencia y la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y mitigar el impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. La última idea presente en su finalidad, tiene que ver con la mitigación de los impactos negativos derivados del consumo, haciendo una distinción entre las tesis prohibicionistas del gobierno que se encarnaron en el intento de prohibición de la dosis personal y los nuevos enfoques en salud pública, los cuales parten de la aceptación del consumo y la necesidad de gestionar los riesgos que estos implican.

Sin entrar en detalles del modo como se edificó la Política Nacional en mención, esta se divide en cuatro ejes principales: la prevención, la mitigación, la superación y la capacidad de respuesta. Para los efectos de éste trabajo nos centraremos en el segundo, la mitigación, puesto que constituye el fundamento de las acciones posprohibicionistas en cuanto a la institucionalización del discurso se refiere. La mitigación se define como “evitar/prevenir que quienes ya se han iniciado en el consumo transiten a patrones de uso problema o a la dependencia (prevalencia); evitar que quienes ya se han iniciado en el consumo, corran riesgos continuados, vean afectada su salud física, mental, emocional, familiar y social y que por efectos de su consumo pongan en riesgo a

terceros (impacto); y evitar que quienes hayan superado su condición de consumidores activos por voluntad y hayan mantenido un estilo de vida libre de “drogas”, retornen a él.”

Lo importante de las contradicciones que se gestaron en el gobierno de Álvaro Uribe respecto al consumo de droga no es la contradicción en sí misma, sino el papel que jugaron profesionales y técnicos con perfiles ideológicos abiertamente opuestos al enfoque prohibicionista que permearon la institucionalidad y, desde el criterio técnico y de la salud pública, pusieron en la agenda institucional programas y proyectos relacionados con la reducción de riesgos y mitigación de daños a pesar de la existencia de un contexto político desfavorable: tal es el caso de la aparición en el país de varios proyectos financiados por el Ministerio de la Protección Social y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito enfocados a la mitigación en ciudades como Cúcuta, el eje cafetero y Bogotá. La estrategia fue establecer un diálogo con las autoridades públicas con un discurso enfocado hacia la salud pública y con propuestas de trabajo articuladas en torno a los ejes operativos de la Política Nacional. El resultado fueron proyectos piloto con la participación abierta de los jóvenes en la construcción de herramientas pedagógicas que permitieran prevenir el consumo de sustancias y mitigar el impacto en las zonas focalizadas¹⁰. Esto en últimas supuso los inicios de la generación de oportunidades políticas para la acción colectiva que se opone a la prohibición como se verá mas adelante.

¹⁰ Véase el documento “la prevención en manos de los jóvenes” Herramientas pedagógicas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y mitigación del impacto para líderes de organizaciones juveniles. Ministerio de la Protección Social y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC). 2010.

2. Acción colectiva y tecnocracia: Lecturas críticas al paradigma de la prohibición del consumo de drogas

El presente capítulo tiene como propósito realizar una presentación detallada de las dos formas de acción colectiva que plantean una posición crítica frente a la prohibición del consumo de drogas en Colombia. La primera la denominaremos *Acción colectiva institucional* por su vocación técnica y de interacción con el estado colombiano y la cooperación internacional, la cual será determinante en la obtención de recursos, este es el caso de la Corporación Acción Técnica Social (ATS). La segunda la llamaremos *acción colectiva de base* por su vocación de trabajo comunitario enfocado principalmente en la defensa de los derechos de los consumidores de marihuana, la normalización del consumo y la exaltación de los diferentes usos que se pueden realizar de esta planta con un marcado distanciamiento de la institucionalidad estatal, este es el caso de la Comunidad Canábica Colombiana (CCC).

Las tipologías propuestas obedecen a dos razones principales. Primero, la acción institucional representa una manera alternativa de ver la prohibición del consumo de drogas bajo un enfoque de salud pública encarnado en programas de reducción de riesgo y mitigación del daño, en ella se construye una relación de tercerización de las funciones del estado donde la acción cuenta con recursos para la materialización del discurso, el epicentro de sus acciones se encuentra en la ciudad de Bogotá y se expande mediante la ejecución de proyectos a otras regiones del país. De esta interlocución con el estado colombiano surge el problema del “gobierno de los técnicos”, el cual se inspira en una clara posición política en materia de drogas pero que fundamenta su accionar en la tecnocracia, entendida como un movimiento ligado a la idea del conocimiento científico moderno. Segundo, la acción de base también representa una forma alternativa de ver el paradigma de la prohibición del consumo de drogas, las relaciones que se construyen son principalmente entre los usuarios de cannabis, y los ciclos de protesta que se presentan en el mes de mayo conmemorando el mes de la marihuana desde 2008 representan un número considerable de personas que se movilizan¹¹, esto

¹¹ En el año 2008 la marcha mundial de la marihuana comenzó con una asistencia de 50 personas aproximadamente, para el año 2009 el número creció a 2.500; con el paso de los años la marcha ha

será determinante, pues el poder de convocatoria y la generación de adeptos, es uno de los rasgos principales del poder del movimiento. A pesar de que se puede hablar decanábico en varias ciudades de Colombia como Cali, Barranquilla y Bucaramanga, no es comparable la magnitud de la movilización con la ciudad de Medellín, esta es la principal razón que nos motiva a elegir este caso. Cabe resaltar que el movimiento no ha agotado sus esfuerzos en las masivas movilizaciones urbanas en los últimos años, por el contrario, a través de redes sociales principalmente, ha sido notorio el constante trabajo comunitario enfocado hacia la pedagogía del uso del cannabis, mostrando sus principales usos y promoviendo una de las principales estrategias autonómicas con relación al tráfico y microtráfico de esta sustancia en Colombia: la promoción del autocultivo.

Cabe advertir que el fin último de cada una de estas formas de acción colectiva no tienen como propósito la legalización del consumo de drogas, no por lo menos en el corto plazo. La crítica de cada uno de estas formas de acción colectiva, si bien parten del cuestionamiento a los fracasos de la política antidrogas, no se agota en un planteamiento pro-legalización, dicha crítica como veremos mas adelante en los dos tipos de acción se orienta hacia un estado alternativo al orden actual, entendiendo la necesidad no sólo de repensar las políticas contra el consumo sino resignificando las sustancias mismas como en el caso de la marihuana, de suerte que hablar de antiprohibición resulta impreciso, ya que estas formas de acción no se ubican como antítesis de la prohibición sino como un momento alternativo a ella caracterizado por el abordaje de nuevos enfoques de intervención, normalización y descriminalización del consumo así como la apertura de espacios para el debate.

A pesar de que hay algunas similitudes entre estas dos formas de acción también existen marcadas diferencias. En algún momento de la historia reciente del activismo que se remonta al año 2011, hubo encuentro y se emprendieron acciones conjuntas en

incrementado notoriamente el número de asistentes, a tal punto que para el año 2012 los organizadores de la marcha calculan una asistencia de 60.000 personas aproximadamente. Como las marchas no cuentan con un apoyo formal de parte de las autoridades la cuantificación de los asistentes es un cálculo de los organizadores, la Comunidad Canábica Colombiana (CCC).

manifestaciones relacionadas principalmente con el uso de cannabis, sin embargo las diferencias entre algunos líderes marcaron lo que a la fecha es una relación prácticamente inexistente con enfrentamientos y una ruptura marcada, cuestión que da a entrever los desencantos del activismo y las contradicciones al interior del mismo, lo que se resume en un acciones divididas.

La manera como se recolectó la información fue por medio de técnicas cualitativas de investigación, donde la entrevista a profundidad es la principal herramienta que sirvió para indagar con los principales líderes y actores de estas formas de acción.

Las preguntas que fueron empleadas en la entrevista obedecieron a criterios y variables de investigación iguales para ambos casos, en primera instancia se quiso indagar los orígenes de ambas formas de acción y cuál era su objetivo final. Otra variable empleada fue los mecanismos que cada caso empleó para ganar nuevos adeptos con el propósito de comprender la razones que explican las expansión de la acción. La organización de ambos casos fue relevante en la entrevista, se indagó entonces la existencia de líderes, funciones al interior de la organización y los niveles de profesionalización de los integrantes. La identidad y la generación de solidaridad fueron determinantes para hablar o no de la existencia de movimiento sociales, por lo tanto también fueron exploradas. Otra de las variables centrales en la entrevista fue los recursos materiales y simbólicos empleados en las acciones así como los niveles de articulación con otras organizaciones, personas, grupos o sectores que se oponen a la prohibición de las drogas.

También fue importante la observación participante en marchas, plantones y otras actividades relacionadas de manera directa con el en drogas. Así mismo el análisis de redes sociales, prensa virtual y medios de divulgación alternativos como flyers, afiches, fanzines entre otros fueron un importante insumo para la comprensión de los discursos de cada uno de los casos analizados.

Para la presentación de los casos, consideramos pertinente el diálogo con algunos presupuestos de teóricos sobre movimientos sociales, los cuales permitirán comprender las trayectorias de acción, modos de organización y significados contruídos a partir de posiciones contrarias o alternativas a la prohibición del consumo de drogas, así mismo, algunas reflexiones sobre el conocimiento experto fundado en la idea del gobierno de los técnicos, conocido como tecnocracia. A continuación presentamos una descripción detallada de la génesis de cada una de las formas de acción posprohibicionista propuestas para el análisis comparado, mostrando sus principales actores, trayectorias de lucha, aliados, y relaciones en el campo del consumo de drogas en Colombia.

2.1 Acción colectiva institucional: salud pública, oportunidades políticas y tecnocracia

“No es en contra de la prohibición sino a favor de una reforma a las políticas contra las drogas”

Acción Técnica Social

La manera como fue caracterizada la trayectoria de la Corporación Acción Técnica Social fue de manera diversa. Inicialmente se realizó una indagación documental de las acciones y proyectos emprendidos por la corporación a lo largo de su historia por medio de la documentación oficial de la organización disponible. Esto permitió conocer de manera detallada no sólo las trayectorias de acción sino los actores institucionales y de la cooperación internacional con los que se emprenden alianzas y se gestionan recursos. Posteriormente se procedió a realizar una serie de entrevistas a profundidad con el líder de la organización. Esto permitió no sólo conocer los inicios de la acción, así como su historia, sino determinar cuál es el sentido que la organización le otorga a la acción, los medios que emplea para la consecución de los fines y finalmente, cuáles son sus aportes frente al cambio del paradigma de la prohibición de las drogas.

El criterio principal para elegir al entrevistado se fundamentó en que este es el líder y fundador de la Corporación Acción Técnica Social, esto permitió para efectos de la recolección de información conocer de manera detallada los orígenes de la organización, sus trayectorias, evolución en el paso del tiempo así como las motivaciones que lo llevaron a formar esta corporación. Por otra parte en tanto líder del proceso es él quien da las directrices de la organización y por lo tanto su posición es determinante para la descripción del caso.

Para dar inicio a la descripción de lo que hemos denominado acción colectiva institucional es necesario realizar una contextualización del objeto de estudio. Esta forma de acción colectiva es básicamente una asociación formal, entendida la asociación como “una relación social con una regulación limitadora hacia fuera cuando

el mantenimiento de su orden está garantizado por la conducta de determinados hombres destinada a este propósito: un *dirigente* y, eventualmente, un *cuadro administrativo*” (Weber, 1964, p. 39) . Es pertinente la definición que realiza Weber en tanto permite develar una situación particular de esta forma de acción, ya que los orígenes de dicha asociación se hallan en las acciones puntuales de una figura dirigente, que posteriormente amplía el espectro y ámbitos de acción para conformar un cuadro administrativo.

La corporación Acción Técnica Social tiene sus orígenes hacia el año 2008, cuando cinco profesionales de las ciencias sociales trabajan para el Programa presidencial Colombia Joven¹², dentro de las líneas de trabajo de dicha corporación se encuentra el tema de prevención del uso y abuso del consumo de sustancias psicoactivas donde Julián Quintero López¹³, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es el encargado de coordinar dicha línea. Durante el trabajo con esta entidad, Quintero López tiene un encuentro con diferentes enfoques que permiten abordar el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, uno de ellos el de *reducción de riesgos y mitigación del daño* que básicamente tiende hacia la aceptación del consumo, entendiéndolo como un fenómeno social presente en la realidad y que difícilmente desaparecerá de manera definitiva en las sociedades modernas, ofreciendo formas de tratamiento tendientes hacia la mitigación de los efectos nocivos sobre la salud y el contexto social.

A pesar de que Quintero López es el fundador de la línea de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas en ATS, no es el único actor que se encuentra inmerso en el desarrollo del enfoque dentro de la organización. Son varias las personas que hacen parte de la organización y que desarrollan distintos proyectos. Sus perfiles son cualificados por cuanto poseen experiencia en el campo del consumo de drogas y en

¹² El programa presidencial Colombia Joven es el ente rector del Sistema Nacional de Juventud, en el marco del estatuto de ciudadanía Juvenil expedido mediante la ley 1622 de 2013. Tiene como objetivo en coordinación con la sociedad civil implementar gradual y progresivamente medidas de prevención, protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que

¹³ La reconstrucción de la historia de la Corporación Acción Técnica Social es producto de una entrevista realizada en el mes de octubre de 2012 a Julián Quintero López. Socio fundador de ATS.

su totalidad son profesionales en ciencias sociales. Esto es relevante, ya que la acción se configura como experta y calificada. En la revisión de la documentación existente sobre la entidad (hoja de vida institucional) se definen de la siguiente manera:

“La Corporación Acción Técnica Social –ATS- es una entidad sin ánimo de lucro, creada en Abril de 2.008, conformada por un grupo destacado de expertos y profesionales en temas de investigaciones poblacionales, diseño, desarrollo de Políticas Públicas y Programas sociales, quienes a través de su implementación buscan desarrollar modelos de mejores y más oportunidades para los grupos más vulnerables de Colombia.”¹⁴

Su principal área de trabajo es el de sustancias psicoactivas, definida de la siguiente manera:

“Nuestra Organización comprende la importancia de la participación en la generación de esfuerzos preventivos en reducción de riesgos y mitigación de daños en consumo; la perspectiva participativa de la organización nos ha permitido sistematizar las expectativas de los jóvenes con relación a nuevos modelos de prevención e intervención, esto nos ha permitido intervenir de manera no sólo atractiva sino exitosa en poblaciones de alta incidencia y vulnerabilidad frente al consumo”¹⁵.

El desarrollo de Acción Técnica Social como organización no gubernamental no hubiese sido posible sin la ayuda del estado colombiano y las organizaciones no gubernamentales internacionales. La manera como se entra en contacto con las instancias institucionales no es demasiado compleja, haber hecho parte del programa vicepresidencial Colombia Joven le permitió a Quintero López tener interlocución con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales que

¹⁴ Corporación Acción Técnica Social. *Hoja de vida institucional*. Bogotá Colombia 2013.

¹⁵ *ibid.*

trabajaban el tema de juventud, entre ellas, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana –GTZ-.

GTZ sirvió de primer impulso para apoyar el proyecto “Acción Técnica Social”. Se puede decir que gracias a la cooperación alemana ATS tuvo su primer fuente de financiación para el trabajo en reducción de daños en consumo de drogas. El programa CERCAPAZ de GTZ es una estrategia que promueve la cultura de paz en dos territorios priorizados: el departamento de Norte de Santander y Caldas donde se desarrollaron iniciativas relacionadas con jóvenes, convivencia y cultura de la legalidad. El apoyo que brindó la GTZ fue incorporar a ATS dentro del programa, donde este sería el ejecutor del tema de prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactiva en jóvenes poniendo en marcha estrategias de trabajo entre pares tendientes a reflexionar en lo referente al tema de drogas bajo enfoques de intervención alternativos como la reducción de riesgos y daños; además de construir estrategias de comunicación masiva que lograra persuadir a los consumidores de drogas a reducir los riesgos y daños relacionados con el consumo.

La ejecución de este tipo proyectos en las entidades territoriales por lo general se realiza de manera articulada con las autoridades estatales. De tal suerte que la ejecución de estas iniciativas sirvió como escenario de interacción con alcaldías, gobernaciones y la nación, lo que permitió no sólo visibilizar más el trabajo, mostrar un enfoque nuevo de intervención frente a la farmacodependencia en Colombia sino encontrar nuevos aliados para futuros proyectos.

Hacia el año 2009 se logra la gestión de recursos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –UNODC- y el Ministerio de la Protección Social para la construcción de una herramienta pedagógica para la integración del tema de prevención del consumo de drogas y la mitigación del impacto en las organizaciones juveniles en la ciudad de Bogotá. Este proyecto, de cuantías menores, le permite a la organización posicionarse en la ciudad de Bogotá y entablar un diálogo permanente con el referente nacional para los temas de consumo de drogas y salud pública.



Imagen 1: Primer módulo de formación de pares desarrollado por la Corporación Acción Técnica Social con recursos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y el Ministerio de la Protección Social (2009).

Entre los años 2010 y 2011 se desarrolló un proceso de formación de pares para la construcción de una estrategia de comunicación en prevención y mitigación del consumo de SPA en el departamento de Norte de Santander, para esta ocasión las acciones se financiaron con recursos del Departamento de Norte de Santander y el Ministerio de la Protección Social en los municipios de Tibú, Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, Pamplona y Cúcuta. Tras la interacción de ATS con el departamento de Norte de Santander y la situación de consumo de heroína en la ciudad de Cúcuta el departamento financia un estudio rápido de situación de consumo de heroína y seroprevalencia en Pamplona y Cúcuta. Investigación que serviría de insumo para lo que se constituiría en las primeras intervenciones en reducción de daños con inyectables en Colombia.

Entre Abril de 2011 y Marzo de 2012 ATS desarrolla una estrategia educativa de promoción de la salud y de comunicación para la mitigación del impacto del consumo

de Heroína mediante la realización de grupos de apoyo involucrados con el consumo de heroína en el área metropolitana de Pereira. Posteriormente las acciones se extienden hacia el departamento de Caldas.

Al mismo tiempo en la ciudad de Bogotá se inician acciones relacionadas con el fenómeno del consumo problemático de alcohol, entre 2011 y 2014 se ejecutan varias iniciativas relacionadas con la reducción de daños en consumo de alcohol en diferentes localidades de Bogotá donde hay zonas masivas de entretenimiento nocturno. Estas iniciativas se fundamentan básicamente en darle pautas de conducta a los consumidores de licor en lo concerniente al modo como debe ser consumida esta sustancia con el propósito de reducir los daños y los riesgos asociados a su consumo.

Uno de los proyectos mas emblemáticos que ha tenido ATS es el proyecto “Echele cabeza cuando se dé en la cabeza” esta iniciativa, financiada desde el año 2013 por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá tiene como objetivo intervenir en los espacios de ocio nocturno donde es evidente el consumo de sustancias psicoactivas ilegales. Este se ha constituido en uno de los principales proyectos de la corporación ya que hay un contacto directo con la población consumidora de sustancias psicoactivas a la cual se les brindan pautas o consejos tendientes a reducir los efectos que puede ocasionar el consumo de sustancias ilegales sobre la salud humana. Desde el año 2014 no sólo se realizan las intervenciones mediante información sobre reducción de riesgos y daños sino que se ofrece el servicio de testeo de sustancias psicoactivas, el cual consiste en tomar una pequeña muestra de la sustancia que posea el beneficiario del proyecto para ser evaluada y determinar no sólo su pureza de las sustancias sino sus adulterantes, esto en procura de reducir los daños en la salud de los consumidores.



Imagen 2. Pieza comunicativa sobre convivencia en espacios de ocio nocturno. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá

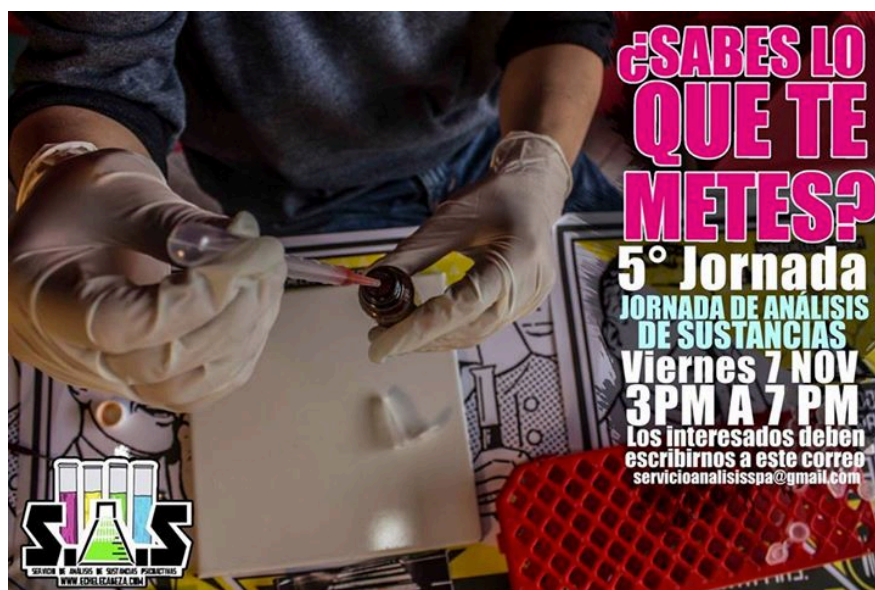


Imagen 3. Afiches jornadas de testeo de sustancias psicoactivas ilegales. Corporación Acción Técnica Social Fuente: Facebook.

Uno de los proyectos mas controversiales en la historia de Acción Técnica Social es la estrategia piloto para la mitigación del consumo de SPA en UDIS (Usuarios de drogas por vía inyectada) financiado en el año 2013 por la organización no gubernamental Open Society y que tiene como objetivo principal el intercambio de jeringas a la población usuaria de heroína principalmente. Este proyecto fue ejecutado en las ciudades de Pereira y Cucuta presentando una característica particular: dada la naturaleza del proyecto, el cual básicamente consistía en regalar kits de inyección

segura a los consumidores de heroína a cambio de que estos entregaran sus viejas jeringas en aras de prevenir el contagio de enfermedades como el VIH y la hepatitis b, este proyecto no contó con el apoyo institucional del estado colombiano y por el contrario encontró un ambiente político desfavorable para su puesta en marcha. Fue entonces necesaria la búsqueda de organizaciones no gubernamentales como Open Society con experiencia en este tipo de intervenciones para financiar la propuesta e impactar a una población altamente vulnerable. Paradójicamente el proyecto demostró un impacto social considerable sobre la calidad de vida de los adictos a la heroína y otras sustancias inyectables y comenzó a ser apoyado por instancias institucionales colombianas como la Secretaría de Salud de la ciudad de Bogotá.



Imagen 4. Vehículo de acceso a material higiénico de inyección proyecto CAMBIE. En la ciudad de Pereira.

Respecto a los nuevos modelos de prevención e intervención, estos son definidos como:

“Reconocen el consumidor o no consumidor, como un sujeto activo con criterio y con capacidad de recibir y procesar información para tomar decisiones responsables sobre su salud. En esa línea, se promueve la

información y la educación tanto para quienes no consumen como para quienes ya lo hacen”¹⁶.

En cuanto a las acciones puntuales en materia de consumo de sustancias psicoactivas, el documento citado muestra cuatro frentes principales, los cuales muestran de una parte, la vocación por entender el fenómeno del consumo como un problema de salud pública, sin embargo, también queda entre dicho la inspiración por el activismo y la búsqueda de reformas a las políticas de drogas en el país y en el mundo. El primero de ellos es la investigación para la acción mediante el conocimiento de las dinámicas del consumo de sustancias psicoactivas, esto con el propósito de abordar evidencias científicas que permitan actuar de manera idónea. El segundo es la incidencia en el debate político y la construcción de políticas públicas para la reforma de políticas de drogas a nivel local, nacional, regional y mundial. El tercero es la Intervención directa con comunidades, usuarios de drogas, instituciones, ciudadanos y personas en contacto con el fenómeno del consumo de sustancias para la formación, cualificación y participación que permita cambiar las conductas y los hábitos de consumo de los ciudadanos fundamentados en la reducción de riesgos y la mitigación de daños. Y finalmente el cuarto es la organización, participación, movilización y cabildeo por los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas y las personas de su entorno¹⁷.

¹⁶ ibíd.

¹⁷ ibíd.



Imagen 5. Cartel encuentro internacional de alternativas frente al consumo de sustancias psicoactivas. Fuente: Facebook.

Cabe resaltar el papel que tuvo la apertura de oportunidades políticas para la aparición de esta forma de acción colectiva institucional, con la aparición en el año 2007 de la Política Nacional Para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto por parte del Ministerio de la Protección Social se abre un espacio importante para legitimar acciones opuestas a la prohibición del consumo con un enfoque salubrista. Esta política es la carta de navegación que permite la construcción de una respuesta nacional y local al consumo de drogas, donde uno de los ejes principales es la mitigación, el cual busca reducir el impacto individual, familiar social y sanitario del consumo de SPA, es decir, parte del consumo como una realidad, como algo que ya está ocurriendo y por lo tanto las acciones de mitigación deben reducir la vulnerabilidad a correr riesgos continuos que son prevenibles y evitables.

Una de las principales tesis de la Teoría de Estructura de Oportunidades Políticas es que la gente se suma a los movimientos sociales como respuesta a las oportunidades que encuentra en el campo político, y durante las trayectorias de lucha crea otras nuevas por medio de la acción colectiva. Tarrow (1994) define la Estructura de Oportunidades Políticas como “dimensiones consistentes del entorno político que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente (...) el concepto de oportunidad política pone énfasis en los recursos exteriores al grupo que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados” (Tarrow, 1994, p. 49).

Para Tarrow el problema de la acción colectiva es social, no individual. Los movimientos surgen cuando se amplían las oportunidades políticas, cuando se demuestra la existencia de aliados y cuando se pone de relieve la vulnerabilidad de sus oponentes. ATS encontró en las contradicciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez un espacio de apertura para la acción, ya que mientras el gobierno sostenía un discurso abiertamente prohibicionista pretendiendo eliminar la figura de la dosis personal como evidenciamos mas arriba, los técnicos en salud pública desde el Ministerio de la Protección Social abrieron espacios técnicos y legales para facilitar acciones en salud orientadas a aceptar el consumo de drogas. Esto permitió su vez nuevas posibilidades a la sociedad civil organizada de avanzar en contra de la prohibición del consumo de drogas en una línea similar.

La descripción de la acción colectiva institucional devela dos elementos centrales: el primero es que la obtención de recursos se lleva a cabo desde la institucionalidad estatal y segundo, el enfoque en salud pública se orienta hacia la reducción del daño, programas de inspiración europea, el cual, como cualquier otro enfoque de tratamiento, implica determinados conocimientos y nivel de especificidad para el desarrollo de acciones concretas. Esto significa que los actores inmersos en esta forma de acción poseen ciertos conocimientos, saberes técnicos y científicos que permiten la puesta en marcha de los proyectos y acciones mencionados anteriormente. Consideramos entonces pertinente abordar algunos aspectos del pensamiento sobre la tecnocracia para

interpretar la manera como un conocimiento técnico y especializado construye acción desde el fenómeno de la tercerización de la acción del estado en campos como la salud.

Max Weber analiza cómo la modernidad trae consigo una tendencia hacia la racionalización, la complejidad y por ende la necesidad de una especialización creciente, por lo tanto la aparición de actores sociales especializados era un fenómeno social inevitable:

Cuanto más se complica y especializa la cultura moderna, tanto mayor es la necesidad de un experto dotado de objetividad para su organización. Este trabajo, en las estructuras de la antigüedad era desempeñado por el maestro que se dejaba influir por la simpatía personal o el favor. La burocracia ofrece las actitudes requeridas por la organización racional de la cultura moderna (...) La razón decisiva que explica el progreso de la organización burocrática ha sido siempre su superioridad técnica sobre cualquier otra organización. Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa en relación a las demás organizaciones, de la misma forma que una máquina con relación a los métodos no mecánicos de fabricación. La precisión, la rapidez, la univocidad, la oficialidad, la continuidad, la discreción, la uniformidad, la rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costos objetivos y personales, son infinitamente mayores en una administración severamente burocrática. (Weber, 1972, p. 265).

El análisis de Weber señala que en la cultura moderna es necesario cierto nivel de especialización dentro de la organización burocrática estatal para el desarrollo de determinadas funciones que guardan complejidad. Para el caso de la ejecución de programas en reducción del daño, los conocimientos especializados en materia de drogas y nuevos enfoques de intervención son necesarios, y a pesar que se puede advertir la existencia de un trasfondo u orientación política en los repertorios de acción y el abordaje del fenómeno del consumo, se guarda una relación directa con el conocimiento técnico, la rigurosidad y la lectura del consumo de drogas como un asunto de salud pública, el cual se desarrolla para el caso se Acción Técnica Social si bien no

en el seno de la institucionalidad estatal, si con sus recursos, y supliendo algunas sus funciones en materia de drogas.

En consecuencia, hablamos entonces de una estructura formal, no estatal, que desempeña acciones en salud con un enfoque especializado y de índole técnico. Daniel Bell (1973) define la tecnocracia como “un sistema político en el cual la influencia determinante pertenece a los técnicos de la administración y la economía. Un tecnócrata es una persona que ejerce su autoridad en virtud de su competencia técnica. La mentalidad tecnocrática enfatiza en la lógica, en la solución práctica de los problemas, en el cumplimiento disciplinado de los objetivos, en el cálculo, en la precisión y en la medida y en el concepto de sistema” (Bell, 1973, p.348-349). Desde esta definición, las acciones de Acción Técnica Social pueden ser enmarcadas como un dominio del conocimiento técnico para la ejecución de programas en reducción del daño, así mismo se devela una distinción clara entre activismo como una posición política desde la sociedad civil y la línea técnica orientada desde la práctica. Cuando fue indagado al representante legal de ATS sobre los repertorios de acción de la organización este menciona al respecto:

“Hay un escenario *técnico*, donde se escriben los proyectos, se debate sobre los enfoques, se hacen las políticas públicas. Tiene que ver con haber estado en la escritura de la política de drogas distrital (...) la masa es lo que hace bulla y lo técnico es lo que le da el argumento”¹⁸

Touraine (1969) coincide con algunas ideas plasmadas por Bell al considerar que los tecnócratas se han transformado en una nueva clase dominante en la sociedad post-industrial. Mientras que en las sociedades industriales el núcleo central del orden era la fábrica, en las post-industriales, será la universidad la que tendrá un rol destacado en virtud de ser el centro productor de intelectuales que manejan los conocimientos necesarios para el nuevo “orden social” (Esteves, 2005).

¹⁸ Entrevista a Julián Quintero López, representante legal y líder de la corporación Acción Técnica Social. Bogotá 2012.

La puesta en marcha de programas en reducción del daño son una postura política en sí misma, abiertamente contraria al enfoque de la prohibición. No es del todo demostrable que las acciones de ATS estén desligadas del accionar de los políticos, por el contrario, en muchos de ellos hay valiosos aliados para la consecución de determinados propósitos políticos o la puesta en marcha de programas en reducción de daño dentro de la agenda pública: cuando se indagó a Quintero López sobre cuáles son los espacios que permiten generar el cambio de pensamiento en el ámbito político, respondió:

“Estamos aprovechando la apertura de la oportunidad política en la macro estructura: en el presidente, en los congresistas, en el panorama internacional. Para el próximo año estamos enfocando un frente de trabajo a las campañas políticas”¹⁹.

No es que la acción colectiva institucional vea a los políticos como pasionales e ideológicos, esta es en sí misma ideológica y tiene un interés marcado hacia un ámbito de la reflexión pública:

“Está claro que lo que queremos es una reforma a una política de drogas, ¿Cómo lo queremos? Es algo que se da en la marcha, la marcha y la cotidianidad es algo que nos va diciendo por donde hay que dar esos quiebres (...) a nosotros lo que nos interesa es que el espectro del análisis de drogas tenga mas elementos, brindarle a la sociedad, a los partidos políticos, a la academia, al padre de familia y a los medios de comunicación un nuevo lenguaje, una nueva forma de referirse al fenómeno, mas elementos, mas fuentes para que puedan discernir mas sobre el tema. Nosotros como técnicos lo que mas nos interesa es dar más herramientas a la sociedad para que entienda de manera distinta el fenómeno (...) que no todo sea narcotráfico, violencia, drogadicto, prevención o superación, sino que el matiz es mucho mas grande, para eso ATS investiga, para eso ATS licita, para eso hace proyectos, todo lo que hacemos queda sistematizado”²⁰.

¹⁹ Julián Quintero López. Representante Legal Corporación Acción Técnica Social. Bogotá 2012

²⁰ Ibid.

El concepto de tecnocracia no satisface plenamente los ánimos explicativos del fenómeno técnico en la formulación de políticas y programas que se oponen a la prohibición de drogas en Colombia, sin embargo Fisichella (1986) hace un aporte importante respecto a nuestro objeto de estudio, estableciendo una distinción entre tecnocracia y técnicos:

“No debemos confundir la profesión del técnico con la del tecnócrata. Ambos buscan su idoneidad y la eficiencia, pero un técnico es un profesional especializado en un tema concreto, mientras que un tecnócrata es un generalista, es un experto de lo general, animado por una ideología que se nutre del racionalismo y de los progresos científicos del industrialismo” (Fisichella, 1986, P. 1607).

Como menciona Fisichella, la tecnocracia es entonces una interpretación de índole generalista sobre un enfoque de formulación de políticas públicas, mientras que un técnico apela a un conocimiento específico sobre determinado fenómeno de la realidad que le compete a la intervención pública estatal. Por lo tanto en el caso de la acción colectiva institucional nos enfrentamos a un caso donde los técnicos expertos en un enfoque de intervención en drogas opuesto a la prohibición formulan determinadas acciones que se basan desde presupuestos técnicos, pero que no necesariamente caben dentro de la tecnocracia. Sin embargo Nelkin (1987) señala que existe una creciente tensión entre conocimiento experto y valores democráticos. Si bien la tecnocracia es un aporte positivo dada la racionalidad en la toma de decisiones del gobierno, la complejización en ciertos temas implica dejar a muchos ciudadanos por fuera de la comprensión de ciertas decisiones, es decir, la ciencia jugaría un doble papel, por un lado aumenta nuestro conocimiento sobre ciertos temas y por el otro, restringe la participación de ciertos ciudadanos por la elevada especialización de sus ideas (Estévez, 2005). Estas restricciones a la participación serán un elemento de análisis central al definir o no Acción Técnica Social como un movimiento social.

2.2 Acción colectiva de base: uso y consumo en la construcción de identidad

“(…) Allá la colinería es muy interesante, es idiosincrática, tiene que ver con el carácter cultural y político de su sociedad, entonces usted encuentra allá personas que independientemente de la historia inmediata del narcotráfico reflexionan en torno a la vida, al individuo, al ser libre, y en lo cuantitativo, una cantidad de marihuaneros sinvergüenzas unidos a un carácter no vergonzante, no mojigato. La CCC bien o mal jala mucho”.

Lucas Pasos Abadía, activista canábico



Imagen 6. Logo Comunidad Canábica Colombiana (CCC). Fuente: Facebook.

Al llegar a la ciudad de Medellín lo primero que hice fue encontrarme con los organizadores y conocer a las personas que como yo llegaban en buses provenientes de otras ciudades y dentro de los cuales se encontraban activistas o personas que viajaban como simples espectadores para hacer parte de una fiesta, esto se hacía notorio por la familiaridad y el regocijo con el que se saludaban todos y la forma como se entrelazaban los abrazos. Cuando me presenté no hubo trato especial o diferenciado, al contrario, era parte de ellos porque se asumía que mi interés investigativo de una u otra forma era un espaldarazo o un voto de confianza en la causa. Se encontraban en ese momento David Patiño y David Ponce -miembros de la Comunidad Canábica Colombiana- los cuales se encontraban coordinando el hospedaje de los recién llegados a Medellín. En sus rostros se dibujaba el compromiso y la serenidad fruto de la

experiencia que hace ya algunos años han venido curtiendo. Los buses seguían llegando al punto de encuentro y miles de personas aguardaban con la calma mientras amenizaban la charla con un “matri” (expresión utilizada que denota el aporte de cannabis de diferentes personas reunidas para la elaboración de un cigarro). Cabe anotar que esta no era la única expresión utilizada, estas variaban según la procedencia de las personas, esta me llamó la atención al igual que “unir fuerzas” o “juntar poderes” muy diferente a la expresión “vaca” utilizada para reunir dinero y así gestionar un trago.

El punto de encuentro se convertía así en un espacio de consumo de cannabis, y en donde de manera poco notoria había presencia una que otra botella de licor. No faltaba la persona que a la par que manifestaba su emoción por compartir con personas que comulgaban con su idea frente al consumo de marihuana ofrecían artículos variados como manillas o inclusive pomadas a base de cannabis, era una especie de feria nocturna en una calle principal y en la que los residentes de los barrios cercanos a aquel lugar se confundían sin presentar reparo alguno o molestia frente a lo que acontecía siendo las 7:20 de la noche. La cigarrería más cercana a donde la mayoría de la gente se dirigía no daba abasto surtiendo con el licor que muy seguramente se había provisionado días antes previendo la cantidad de personas que llegarían a este lugar, la comida estaba a la orden de la noche, comidas rápidas, fritos, mazorcas asadas al igual que la comida de paquetes inundaban el lugar y se agotaban mientras crecía el hambre después de un largo viaje. Todo tipo de transacciones económicas hacían parte de este espacio y desaparecían a medida que las personas se desplazaban a los lugares donde podían acampar o alojarse para descansar y esperar el día siguiente la travesía, el domingo, día en que se realizaba la Marcha Mundial de la Marihuana.

Cuando ya no quedaban casi personas en el lugar me reuní con David Ponce, David Patiño y Lukas Pasos para dirigirnos al hotel en donde nos quedaríamos esa noche, en el trayecto aproveché para dialogar con ellos acerca de la logística y de cómo estaban saliendo las cosas hasta ese momento. Confieso que el diálogo no fue fluido gracias a las innumerables llamadas que recibían de otras personas que estaban colaborándoles y que ultimaban detalles en cuanto hospedaje y lo que correspondía al día siguiente. Al

llegar al hotel nos ubicamos rápidamente y salimos a caminar por la ciudad y compartir un trago para dispersar la tensión producto de la larga jornada. La cita era en un parque, un lugar que se puede entender como una zona de tolerancia y donde entendí cómo los espacios de consumo se configuraban en esta ciudad. Las personas entraban y salían de los bares y algunos de ellos se sentaban a fumar marihuana. La distancia entre la cuadra de los bares y el parque no era mayor a los 4 metros, al sentarme a dialogar con las personas que acompañaban a los organizadores en este parque noté que se podía ingerir alcohol libremente por lo que amenizamos la charla con una cerveza que compramos en un estanco ubicado a una cuadra, al regresar al parque la música a alto volumen proveniente de los bares y el ruido de los carros que pasaban por el costado contrario de los bares me hacían hablar a un volumen alto, lo cual hacía notar mi acento y mi lugar de origen, algunas miradas inquietas alertaban sobre mi presencia, en especial de las personas que vendían sustancias ilegales. El diálogo trascurría con normalidad, yo me daba a conocer con los acompañantes de los organizadores y a su vez ellos me contaban que hacían, que estudiaban, la universidad a la que asistían entre otras experiencias. De repente en el costado por el que transitaban los carros apareció un policía en una moto, el cual se estacionó mientras el semáforo daba luz verde, al verlo y en medio de mi estado de alerta noté que tanto los comerciantes como las personas que estaban consumiendo allí no se inmutaron, al contrario, seguían desarrollando sus actividades como si no se hubieran percatado de la presencia de la policía, al preguntar a las personas con las que me encontraba sobre esta situación ellos me respondieron diciendo que la policía respetaba ciertos espacios y que si se salían del parque para vender sustancias estos expendedores corrían el riesgo de ser arrestados, esta fue la primera zona de tolerancia que conocí en la ciudad de Medellín.

Al día siguiente, domingo 05 de mayo de 2012 la cita era en el teatro Tobón, lugar donde se concentraría la multitud para dar inicio a la marcha, eran las 9 de la mañana y poco a poco se iban acercando personas que traían pancartas y banderas alusivas a la cultura canábica, otros en cambio se disponían a realizar pendones con pinturas y aerosoles, todos alusivos a la hoja de cannabis que simbólicamente a enmarcado la lucha por la defensa de la Marihuana la cual se acompañaba de los colores de la bandera

de Jamaica y en otras pancartas con la bandera de Etiopía por aquello de la identidad rastafari, algunos participantes combinaban estos símbolos con las camisetas de los equipos de fútbol de la ciudad Medellín. La mañana se pintaba en el cielo con un clima parcialmente nublado, en el ambiente se respiraba la quema de marihuana y una pequeña hoguera hacía su aparición en las inmediaciones del parque en el que se encontraban reunidos, los malabaristas decoraban el ambiente con las clavas y pelotas de colores que hacían su vuelo mostrando la destreza de algunos expertos en este arte, algunos celulares capturaban este momento mientras que los fotógrafos profesionales hacían gala de sus artefactos para retratar todo lo que estaba sucediendo. En los límites del parque hacia aparición un grupo de personas que con total naturalidad ensamblaban los cigarros para compartirlos con los más cercanos, sin conocerse las personas compartían los canutos ya armados como muestra de hermandad entre los consumidores. Dentro de los comentarios en voz alta se escuchaban argumentos que daban base a esta forma de solidaridad: “el marihuanero es mi hermano”, “un plon no se le niega a un hermano”. Difícilmente se observaba que alguien no compartiera una calada, todos compartían de sus cigarros, tal vez en muestra de la consigna mayor; “somos una familia”. Mientras las miradas descansaban de las pintas y de los malabares la gente de a pie se acercaba y preguntaba curiosa y sin mirada inquisidora frente a lo que estaba sucediendo: ¿joven y usted fuma marihuana? ¿porque lo hace?, diferentes diálogos se entablaban entre transeúntes, espectadores y participantes de la marcha, las respuestas variaban según los consumidores, “yo no le hago daño a nadie fumando marihuana” “es mejor fumar que tomar” “esto hace menos daño que el cigarrillo” “me relaja” “no soy un delincuente”. Una mujer de más o menos unos cincuenta años que se encontraba sentada al lado de un árbol y del que se desprendía un pendón en el que se encontraba una clase de manifiesto en pro del uso medicinal de la marihuana, da una entrevista y argumenta sosteniendo un porro entre sus dedos cómo la marihuana había cambiado su vida y los beneficios que esta traía a su salud, era un relato de vida que quedaba registrado en las cámaras y videograbadoras mientras algunos jóvenes le pedían que posara junto a ellos para una foto mientras se decían entre ellos: “mirá mirá que chimba la abuela marihuanera”. Nuevamente el olor de la marihuana era opacado por el humo de la hoguera en la mitad del parque que cada vez era más intenso, a su

lado se aprovisionaba madera para mantenerla prendida por un buen rato, esto debía ser así pues se acumulaban diferentes tipos de hortalizas y vegetales que eran puestos por los participantes como una ofrenda a los dioses y de la cual daría como resultado una sopa para preparar la marcha que se avecinaba, una persona se disponía a organizar los alimentos para pelarlos y picarlos y así depositarlos en un fondo de donde se podrían servir alrededor de unos doscientos platos, el agua era obtenida de la pila del parque y rápidamente llenaba el fondo para dar inicio a la cocción, cualquier insumo era bien recibido para aliñar la sopa. En otros lugares del parque se hacían recolectas entre algunos grupos para comprar un trago mientras que algunos punkeros pedían una moneda para gestionar el preciado líquido. La única presencia inerte era la de un cuerpo en bronce que se posaba en la pila del parque sosteniendo un águila en sus hombros, de resto todos realizaban actividades diversas. Para los más escrupulosos la oferta de comida se encontraba alrededor del parque en carros de comidas rápidas al igual que los diferentes establecimientos que ofrecían platos a buen precio. La policía por otra parte permanecía estática ante lo que pasaba, según David Ponce, uno de los acuerdos a los que se había llegado con la alcaldía y que se encontraba consignado en los respectivos permisos era el respeto a los participantes de la marcha y la no intromisión de la fuerza pública ante el consumo de marihuana. Otra colecta que llamaba la atención era la que se encaminaba a construir el porro más grande para esta marcha, al terminar la colecta y al armarlo, las dimensiones de este alcanzaron las de un brazo de un humano adulto, todos querían retratarse con este porro gigante y esperaban emocionados el momento en que se prendería. Diferentes medios de comunicación hicieron presencia y buscaban la mejor foto de un evento que lograba convocar más de ochenta mil personas en torno a una idea.

El almuerzo ya estaba listo y un gran número de personas querían degustar el platillo, otros un poco más escrupulosos preferían pasar y dejar que los demás se alimentaran, uno de ellos manifestaba que no quería comer por que el agua con que se realizó la sopa era de la pila del parque y que ahí era normalmente donde se bañaban los habitantes de calle; una anécdota más de este encuentro y que sorprende por el ingenio y la ruptura con lo aséptico en temas de alimentación.

La marcha daba origen e inundaba las calles a eso del medio día, dentro de las pancartas se podían leer consignas como, “marcha canábica Medellín” “I love THC” “las plantas no son como las pintan” “menos violencia más conciencia canábica” “cultivo y consumo responsablemente” no se escuchaban cánticos o arengas a favor de la marihuana, el simple acto de consumir marihuana en las calles y acompañados por los participantes ya llevaba consigo un mensaje.

Las personas que participaron de la movilización eran de estratos 1 y 2 principalmente, la marcha reunía a todo tipo de personas que cumplían diversos roles en la sociedad antioqueña: estudiantes universitarios, trabajadores, activistas y varios turistas de otras ciudades que venían a apoyar la manifestación y que comulgan con la causa canábica. A pesar que la mayoría de personas eran hombres, también hubo una presencia considerable de mujeres, fue un rasgo común a todos los asistentes el consumo constante de marihuana a lo largo de todo el recorrido. A pesar de que la marcha no fue silenciosa, las arengas propias de las marchas de sindicalistas o jóvenes universitarios eran prácticamente inexistentes, el lenguaje no verbal fueron las pancartas, los mensajes y evidentemente, el consumo desmesurado de marihuana y en algunos casos de licor. Durante toda la jornada no presencié casos de riñas o conflictos con la policía, por el contrario, pude concluir que la manifestación transcurrió en plena calma.

La marcha terminó alrededor de las 5 de la tarde en otro parque donde en una menor proporción los últimos participantes se disponían a tomar licor y a fumar cannabis para cerrar esta marcha en una especie de celebración. Es un momento de fiesta y balance de la gestión realizada. Por un momento se siente la relajación por parte de los organizadores de la marcha, solo es temporal, desde el día siguiente inician los preparativos para la marcha el año que viene.

La historia de la Comunidad Canábica Colombiana (CCC) resulta de una reconstrucción hecha por medio de la técnica de la entrevista realizada en el año 2012 a David Ponce, activista y líder principal de la Comunidad Canábica Colombiana. Este advierte, que la

CCC surge en el año 2005 como iniciativa del activista antioqueño David Arango, quien plantea la intención de generar una cultura canábica en la ciudad de Medellín, sin embargo para ese año aún son incipientes las manifestaciones públicas y la alteración del orden en las calles. Las recientes movilizaciones y su crecimiento exponencial se empezaron a gestar en el año 2008 donde se organiza la primera marcha canábica, logrando la asistencia de 50 personas aproximadamente.

Para el año 2009 el crecimiento respecto al año anterior fue notable, ya que la marcha logra reunir 2.500²¹ personas bajo el tutelaje de varios colectivos de trabajo y activistas aislados que aún no logran establecer una sinergia. En el año 2010 comienzan a cambiar las dinámicas de la convocatoria y esto influye de manera notable con el número de consumidores de marihuana asistentes a las manifestaciones. Por medio de publicidad y el despliegue informativo masivo, principalmente en la red social Facebook, es como se invitaba a la gente a participar del evento llamado “Marcha Mundial de la Marihuana Medellín”, muestra de una apropiación y redefinición de los medios alternativos de comunicación como recurso de la acción colectiva.

Hacia el año 2011 varios de los colectivos de trabajo canábicos (Kolinos en Pie de Lucha, The Weed brothers, Cannalivio entre otros) se encuentran de manera casual con un propósito común: solicitar ante las autoridades distritales de la ciudad de Medellín el permiso para realizar la marcha de la marihuana, siendo desde ahí, donde comienza una verdadera sinergia y nace la acción conjunta. El producto de esta experiencia fue lo que permitió generar la primera acción colectiva articulada, donde estuvieron representados todos los colectivos que hasta ese momento tuvieran dentro de sus propuestas reivindicar el consumo de marihuana. Esto permitió en términos de organización dar una mayor fuerza a la movilización, lo que se tradujo en 25.000 asistentes según la personería de Medellín.

²¹ El cálculo de los manifestantes a las diferentes manifestaciones de la Comunidad Canábica Colombiana hacen parte de los propios organizadores de las marchas puesto que estas no contaron con apoyo institucional alguno que cuantificara el número de participantes.



Imagen 7. Marcha de la Marihuana 2013 en la ciudad de Medellín. Fuente: Página oficial de la Comunidad Canábica Colombiana en Facebook.

La dinámica con el paso de los años después de la conformación de la CCC no ha cambiado sustancialmente, esta tiene una junta directiva de 4 personas, las cuales en su mayoría son profesionales en ciencias humanas y cumplen funciones diferentes dentro de la organización, sin embargo, las relaciones que se construyen como movimiento están mas orientadas hacia el aprovechamiento de los diferentes recursos humanos y simbólicos disponibles, de suerte que se crea un vínculo con otras organizaciones, artistas, intelectuales, consumidores, entre otros, encuentros que constituyen el activismo en si.

Lo que se evidencia es cada vez el incremento de los participantes de las marchas anuales en el mes de mayo: para el año 2012 los mismos militantes de la Comunidad Canábica calculan una asistencia de 60.000 personas aproximadamente y el inicio de la participación de colectivos de otras regiones del país, mientras que para el año 2013 la cifra de participantes ascendió a 115.000, cifra demostrable desde los registros fotográficos logrados por los participantes que develan ríos de usuarios de cannabis atestando la ciudad, haciendo de ella una gran nube de marihuana, música y fiesta.



Imagen 8. Marcha de la Marihuana 2012. Medellín Comunidad Canábica Colombiana.

El crecimiento en el número de manifestantes según Ponce obedece a dos razones: la primera es el poder que tienen las redes sociales como facebook, ya que esta fue un medio de difusión efectivo de las pretensiones de los primeros manifestantes, donde no sólo se convocó a marchar por la libertad de la planta y la descriminalización de los usuarios sino que desarrollaron contenidos y mensajes relacionados a la cultura canábica, lo cual generó aceptación y adhesión a las tesis de la CCC. Por otra parte señala Ponce, el consumo de marihuana en la ciudad de Medellín es elevado (esto se evidencia en las cifras de consumo de esta ciudad en comparación con otras ciudades como veremos mas adelante) por lo tanto son miles de personas que usan esta planta ilegal, los cuales se sienten identificados con las tesis de la CCC y por medio de la masiva difusión en redes sociales deciden salir a marchar, y por supuesto, a consumir mientras lo hacen.

Pero, mas allá del poder de convocatoria que tiene una red social como Facebook, hay mas factores explicativos del aumento en el número de movilizadados y militantes de la Comunidad Canábica Colombiana. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de lo que podríamos llamar una cultura canábica en la ciudad de Medellín? ¿Por qué puntualmente podemos llamar esta experiencia un movimiento social? ¿Está allí asentado un movimiento social simplemente porque cada año en el mes de mayo las

calles son invadidas por usuarios de cannabis que irrumpen con la cotidianidad de la ciudad?

David Ponce, popularmente conocido como “Don Marcha” explica que el principal objetivo que persigue la CCC es generar y promover una cultura canábica en Colombia:

“Generar una cultura canábica es generar una información, una pedagogía en torno a los diversos usos del cannabis, sea industrial, medicinal, científico, espiritual o lúdico recreativo, igual no solo sirve para fumar, siempre hacemos esa aclaración con los usuarios y no usuarios del cannabis. Para que alguien pertenezca a la CCC lo único que necesita es respetar los diversos usos del cannabis (...) para así poder generar debate y un discurso posprohibicionista de las plantas prohibidas y sus derivados”²².

Llama la atención en el discurso el tener en cuenta a los no consumidores, pues desde el no consumo es también como se agencia la percepción frente a los consumidores. Otro aspecto importante y señalado, es la incorporación en el repertorio discursivo la noción de posprohibicionismo, superando así la nominación anti-prohibicionista consistente en no sentar una posición en contra de, sino alternativa a. En dicha pedagogía hay implícita una intención de generar desde la comunidad un cambio cultural por encima de un cambio legislativo, esto se devela en la ampliación del repertorio y el discurso que enmarca a la organización, pues según Alexander el discurso permite estructurar acciones colectivas, ya que brinda un lenguaje común para la interpretación colectiva de la realidad, que en este caso es el consumo de cannabis. (Alexander J. 2000, pp. 173-174)

“La cultura canábica también habla de la relación del sujeto consigo mismo, con su cuerpo, su mente, su espíritu, sus emociones, la relación con la planta en sí misma, la relación con otros usuarios de cannabis, con no usuarios y la relación con el planeta y el medio ambiente. Respetar los espacios de los no consumidores, no

²² Entrevista a David Ponce, activista y líder de la Comunidad Canábica Colombiana, Medellín 2012.

fumar en parques donde hayan niños, recoger las basuras... un buen canábico respeta a los seres vivos, las plantas, los animales, un buen canábico no hace daño a terceros, generar esa cultura, ser un buen canábico con el otro”²³

Para la CCC se evocan dos principios, primero el de libertad individual y desarrollo de la personalidad y segundo, la libertad a la “libre asociación”, la cual está relacionada con el autocultivo de plantas de marihuana como un estrategia no solo de autoabastecimiento sino como una forma de hacerle frente al narcotráfico en Colombia; al respecto Ponce advierte:

“(...) también en el cultivo las posibilidades no solo de autocultivo sino de huertas comunitarias y cultivos asociados, lo que genera que las personas que no puedan por tiempo o por espacio o por dinero, que otros les cultiven pero que no sea de manera ilegal o clandestina y que no se alimente el mercado negro”²⁴



Imagen 9. Stencil legalícela usted mismo. Comunidad Canábica Colombiana. 2013

²³ ibid.

²⁴ ibid.

No hay presente en el discurso de la CCC una intensión manifiesta de legalizar la marihuana, se habla mas de “regulación” y “normalización” del consumo. La legalización de la marihuana es algo que perciben en el corto plazo no viable:

“No creemos que sea el momento propicio para la legalización -que se va a dar en un futuro-, es una propuesta, una visión a largo plazo, pero a plazo inmediato hablamos de una despenalización del porte, consumo y cultivo de cannabis para usos espirituales y lúdicos, eso es lo que buscamos”²⁵.

La manera como crece el activismo, y su carácter mismo de movimiento, no se agota en los ciclos de protesta que masivamente se realizan una vez al año. Lo que constituye la acción colectiva de base se halla mas en un constante trabajo que se lleva a cabo desde la cotidianidad, en el trabajo con la comunidad usuaria de marihuana promoviendo no sólo las formas de autocultivo como un mecanismo de autonomía respecto al mercado ilegal de la planta, sino por medio de la generación de lo que denominan la pedagogía del uso, que de alguna manera explica el poder del movimiento por la generación de identidad como fuerte mecanismo para ganar adeptos en el movimiento. Uno de los principales escenarios de debate y de generación de opinión frente al uso de cannabis está en el trabajo en zonas de tolerancia y de consumo en la ciudad, así como la interacción con otros actores organizados en torno a la cultura y el arte (parches, combos, bandas musicales, grupos de artistas, grafiteros entre otros). Cabe resaltar que la socialización de las ideas en torno al cannabis parten de un conocimiento experto que se da en el voz a voz:

“Cuando nos sumamos nuevos activistas empezamos a ser colectivo, es importante el uso de redes sociales, tengo mas de 10.000 seguidores en este momento en el perfil de la Marcha Mundial pro Canábica, hay información en bombardeo referente a todo lo que es la comunidad canábica.” “también hablamos de la planta y de sus usuarios, si el usuario de cannabis tiene una banda y la quiere promocionar le ayudamos a promocionar, si tiene un evento, una propuesta de

²⁵ ibid.

*trabajo y mucho mucho trabajo de a pie, el trabajo de uno por uno, de ir a los parches, a las zonas de tolerancia y sentarse a hablar con la gente” “empezar la cultura del tu a tu, de pie a pie” “en lo personal yo como activista el año pasado hice presencia en mas de 50 eventos en toda la ciudad”*²⁶

La relación con la institucionalidad pública es escasa si se entiende esta como un escenario de debate sobre enfoques de política de drogas o en la consecución de recursos para emprender determinadas acciones. Al momento de la recolección de información se constató la participación del movimiento en la mesa de derechos humanos con la Personería de Medellín para la gestión de permisos relacionados con la ejecución de talleres de autocultivo, foros, cine foros, conciertos, entre otras actividades, sin embargo no son mencionados otros espacios institucionales de participación y/o toma de decisión. Esto de algún modo guarda relación con los recursos materiales de la organización, los cuales son inexistentes. Al respecto Ponce advierte:

*“Recursos materiales no tenemos ninguno, nadie apoya este tipo de movimientos por ser ilegales y de pronto los puedan acusar de una apología o una incitación al consumo de sustancias que es un delito”*²⁷.

A pesar de que el activismo canábico a diferencia del institucional no cuenta con una vocación de interlocución estatal -lo cual ha repercutido en la obtención de recursos materiales principalmente- la capacidad de convocatoria y movilización es indudable, sin embargo esta no es atribuible simplemente a un fenómeno mediático: el uso de las redes sociales no es lo que explica el éxito en las movilizaciones y estas a su vez no son la característica central de la existencia de un movimiento social en la ciudad de Medellín; es en la identidad como consumidores de cannabis y en el intento de resignificar las interacciones con la planta por medio del trabajo comunitario y de base donde se constituye el entramado de creación de sentido, de pertenencia a un grupo, unas causas y una manera de construcción de cultura en la periferia de la institucionalidad estatal.

²⁶ ibid.

²⁷ ibid.

Otro de los factores que explican el poder del movimiento son los altos niveles de consumo de marihuana entre la población antioqueña, según el estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia del año 2013, la ciudad de Medellín es la ciudad que tiene los índices mas elevados con un consumo reciente o prevalencia del 7,5% respecto al total de la población, seguido por los departamentos de Quindío y Risaralda. Bogotá apenas alcanza un 3,2% lo cual es significativo si tenemos en cuenta que la población total es mayor que la de Medellín. Adicionalmente es indudable el carácter idiosincrático de la comunidad paisa y su relación con el consumo de marihuana el cual está condicionado y determinado por la cultura del narcotráfico que tuvo su auge entre la década del 80 y los 90.

Medellín es una de las principales ciudades que sufrió el impacto del narcotráfico en Colombia, sus influjos se apreciaron en el funcionamiento del estado, las instituciones, la sociedad y la generación de una “narcocultura”, la cual de una u otra manera se incrustó en la cotidianidad de las personas al ser parte del ámbito público. La presencia del narcotráfico en la ciudad es parte de la sociedad y contribuye con su transformación, tanto las redes de cultivo, producción, distribución y finalmente el consumo de drogas estan determinada por poderosos carteles de la droga que han creado una compleja industria que ha ocupado espacios sociales considerables no sólo en la dinámica rural sino urbana. Adicionalmente la producción de drogas no sólo sirvió para la exportación, sino que creó unas condiciones para satisfacer un mercado interno, lo cual hace de las grandes ciudades como Medellín también consumidora.

La presencia del narcotráfico hace parte de una idiosincrasia de la “narcocultura” socialmente construida en Medellín, esto ha favorecido la normalización y puesta en el ámbito público de ciertas conductas relacionadas de manera directa con el fenómeno del consumo de drogas, en este caso, de marihuana. “El narcotráfico como fenómeno cubre con su manto no sólo a los grupos y sujetos transgresivos involucrados directamente, sino que su acción –ampliada y perfeccionada durante décadas- ha generado impactos, efectos e influencias de diversos tipos sobre segmentos y sectores sociales mas amplios,

incidiendo sobre la sociedad y la cultura regionales, trastornando escenarios y evidenciando características peculiares, de tipo transgresivo”. (Córdova, 2001, p. 39). Adicionalmente la industria cultural como la televisión, la música popular y hasta la producción de obras literarias ponen de manifiesto los alcances culturales y sociales del narcotráfico y sus fenómenos sociales conexos.

A diferencia de los movimientos sociales clásicos, de los cuales el movimiento obrero es uno de los mas representativos, en los nuevos movimientos sociales “los actores defienden sus intereses en los mercados, campos de competencia y conflictos definidos (sobre una tecnología, una coyuntura económica, conflictos estratégicos, corrientes intelectuales de acción internacional) y no desde una realidad global” (Touraine, 1987, p 97). La acción de base, simpatizante con el uso de la marihuana, es un tipo de movimiento social enmarcado en el paradigma teórico de los nuevos movimientos sociales, su interés no está orientado hacia cambios estructurales en la sociedad Colombiana o antioqueña, sino que su acción defiende causas que atañen a un grupo de interés particular: los consumidores y sus derechos.

El campo de la lucha se restringe entonces a reivindicaciones particulares, en consecuencia no se buscan cambios estructurales en el sistema social sino en uno de sus ámbitos, para nuestro caso, los derechos de los consumidores, las políticas que regulan el consumo y el tratamiento a la planta de cannabis. Desde la teoría de los nuevos movimientos sociales hay una preocupación por darle al análisis sociológico una nueva concepción al sujeto, donde se ponga acento sobre la distancia entre la conciencia y las prácticas, para que estas (las prácticas) se constituyan en modelos que replanteen y creen normas (Touraine, 1987). El sujeto entonces está llamado a cuestionar la formación social de la historicidad. Los consumidores de marihuana en la ciudad de Medellín, a través de sus prácticas cotidianas, sus repertorios de acción y los ciclos de protesta anuales están en consecuencia llamados a cambiar su propia historia, ya sea desde la creación de nuevos marcos normativos o de su interpretación.

Por otra parte, la corriente teórica de los nuevos movimientos sociales se plantea otro interrogante relacionado con la identidad, la cual enlaza tres dimensiones las cuales se entretajan: primero, la formulación de estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbitos de acción (Mellucci, 1999 p. 31). El fin dentro de la acción de base está sentado en la creación de una cultura canábica, la cual está mediada por el consumo y el uso de la planta, el cual se ambienta en ámbitos de acción como las movilizaciones, el autocultivo y las diferentes producciones culturales relacionadas con el activismo canábico. Esto sería un primer productor de identidad. Segundo la activación de relaciones entre los actores, quienes interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones y tercero la realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse.

Otro elemento generador de identidad según Melucci, es la posibilidad de acceder o no a recursos cognoscitivos y relacionales, acceso que determina las oportunidades individuales de participación y negociación de la identidad, la intensidad y la calidad de la participación del individuo y el punto de inicio y duración de su compromiso (Melucci, 1999). A pesar de que la Comunidad Canábica Colombiana posee un líder principal y una junta directiva, por la naturaleza de su repertorio, que se fundamenta en el uso, consumo y autocultivo de marihuana, hay unos espectros de acción amplios dentro del movimiento. La construcción de marcos de significado con relación al consumo se amplía porque es transversal, no piramidal, por ende el sentido de pertenencia a una “comunidad canábica” es mas amplia, porque hay un trato entre iguales que tienen en común el consumo, de modo que un conocimiento especializado o una trayectoria activista nutrida no hace parte de un requisito para militar activamente dentro del movimiento. Esto mejora la intensidad y la calidad de la participación de los individuos y se refleja en el crecimiento del número de adeptos en cada ciclo de protesta. Para efecto de nuestro análisis acerca de si podemos o no hablar de movimientos sociales en cada una de las formas de acción. Esto será determinante como veremos mas adelante.

3. Movimientos sociales y sus determinantes: El rol de la generación de identidad y las formas de capital en el campo de las políticas de drogas

Tras la inmersión en los casos de acción que reaccionan frente al paradigma de la prohibición del consumo de drogas se hace necesario un análisis comparativo a la luz de algunas teorías de movimientos sociales. El presente capítulo pretende mostrar los momentos de cercanía de estas dos formas acción, sus diferencias y finalmente las rupturas que a la fecha parecen irreconciliables. Así mismo, pretende demostrar como la obtención de recursos es determinante no sólo para alcanzar los objetivos de la acción sino para condicionar y determinar la naturaleza misma de esta. Para finalizar, consideramos que las posibilidades de generación de identidad en ambos casos son centrales para demostrar si podemos o no hablar de movimientos sociales en ambos casos.

3.1 Encuentros y desencuentros del activismo: miradas y posición social de la acción

Las acciones institucionales y de base no siempre estuvieron separadas, las tecnologías en comunicación, las redes sociales y el capital social que genera el activismo en varias ciudades del país hace que el accionar de los canábicos entable una relación con Acción Técnica Social en el ánimo mutuo de generar activismo político y social relacionado con el consumo de cannabis y su relación con reformas a las políticas de drogas. El activismo de ATS comienza en el año 2009 con la participación en la organización de la manifestación pública “porte su dosis de personalidad” donde se llevan a cabo los primeros encuentros con activistas canábicos de otras regiones del país, en especial de Medellín y Cali (Comunidad Canábica Colombiana y Las Plantas no son como las pintan respectivamente).

El encuentro y el trabajo conjunto entre la acción de base y la institucional inicia en el año 2011 con una intención de llegar a un número considerable de personas a movilizar:

“(…) si había la intención de que llegaran masas, la convocatoria se hizo por redes sociales, afiches, colectivos, teléfono. Para la preparación del evento hubo reuniones previas cada 15 días por 6 meses con gente cercana de cannabis, empezamos a hacer un nicho con otros colectivos de trabajo”²⁸.

La primera acción conjunta se realiza a modo de plantón en el Parque de los Hippies en la ciudad de Bogotá con la participación no sólo del movimiento de Medellín sino de otros colectivos de la capital del país y Cali principalmente, donde se divulgó información relacionada con el activismo canábico, reforma a la política de drogas, autocultivos, derechos humanos y reducción de daño, de manera manifiesta se pidió a los asistentes al plantón abstenerse de fumar marihuana con el propósito de evitar conflictos con las autoridades, en especial la policía.

La segunda movilización conjunta se realizó en el parque Simón Bolívar el 19 de mayo de 2012, esta tuvo una participación activa de varios colectivos de Cannabis del País, no sólo fue notable la presencia de la Comunidad Canábica Colombiana (Medellín) sino la participación de colectivos de trabajo de otras ciudades como Cali y el eje cafetero. Fueron diversas las actividades que se desarrollaron en la jornada: hubo bandas de varios géneros musicales (rock, Reggae, fusión, experimental entre otras), jornada de promoción del autocultivo, donación de semillas para el cultivo, competencias de todo tipo relacionadas con el consumo de cannabis, activismo político y cubrimiento por parte de algunos medios masivos de comunicación. Esta manifestación contó con una particularidad: además de los permisos respectivos para que una parte del parque Simón Bolívar fuera prestado exclusivamente para esta actividad, las autoridades permitieron el consumo libre de marihuana, situación que suscito en su momento debate en el concejo de Bogotá²⁹.

La tercera movilización conjunta se realizó el 4 de mayo de 2013, la cual partió desde el planetario distrital hacia la plaza Bolívar en la ciudad de Bogotá, con unas

²⁸ Entrevista a Julián Quintero López, Acción Técnica Social, 2014.

²⁹ Artículo on line: <http://www.elspectador.com/noticias/bogota/concejal-denuncia-se-presto-el-simon-bolivar-consumir-m-articulo-359536>

características logísticas, organizativas y temáticas similares: muestras de productores de objetos con cáñamo, culinaria, productos medicinales a base de cannabis, promoción del autocultivo y el propósito de quitar el estigma sobre el consumidor de cannabis donde “ni enfermos ni delincuentes” es una de las principales consignas. En declaraciones para el portal on-line Agenda Bogotá advierte Julián Quintero, parte de los organizadores del evento: “aquí lo que tenemos es un nuevo movimiento social que viene con mucha fuerza. Ahora el reto es comenzar a darle forma y acciones para que una eventual reforma en política de drogas acelere su paso”³⁰.



Imagen 10. Activistas Bogotáños en la marcha de la marihuana, mayo de 2013.
Fuente: Facebook.

A pesar de que se lograron varias acciones conjuntas en la capital bogotana con un éxito relativo en cuanto a convocatoria y logística, hubo diferencias significativas que luego desembocaron en una separación prácticamente irreconciliable. Las diferencias se basaron en tres aspectos: el primero la manera de entender las dinámicas de consumo, segundo la relación que se establece con el estado al hacer activismo político para proyectar la acción y tercero la apertura de espacios de participación para interlocutar con actores institucionales clave. Los activistas canábicos entienden la relación del hombre con la planta desde relaciones subjetivas con el uso que no necesariamente

³⁰ Artículo on line: <http://www.agendabogota.com.co/2013/05/06/tenemos-un-movimiento-social-marcha-de-la-marihuana-bogota-4-de-mayo/>

comparte el enfoque técnico, el cual centraba sus esfuerzos en incidir en las políticas de drogas:

“Yo tuve alianzas estratégicas para movilizaciones específicas; intentamos crear un grupo de estudios del cannabis pero nos dimos cuenta que quien jalonaba era ATS y los demás eran pegados, se caracterizaban por un activismo contestatario de choque, su manera de interactuar era radical y monopólica. Sólo conciben el activismo de base, proletario de movilización, chirri... nuestra movilización es un parche que pueda incidir en los medios, en la política, en la sociedad, para cambiar las políticas de drogas que hay, cogiendo de la evidencia, de la cotidianidad, gestionando proyectos y hablando con gente de afuera, a todo nivel”³¹.

Respecto a la apertura de espacios para la interlocución con actores de la institucionalidad estatal, un activista canábico advierte sobre ATS:

“Cuando hicimos el plantón en el Ministerio de Justicia una cosa fue lo que construimos en colectivo donde ya habían cerradas de puerta porque ya ATS juega a la bloqueada, a la cerrada, son muy tecnócratas estratégicos ahí... ya habían muchas discusiones virtuales, entonces una cosa fue lo que dijimos otra cosa fue lo que se escribió y otra cosa fue lo que se leyó ante los medios y otra cosa fue el resultado, que fue Julián Quintero quien terminó sentado con Vargas Lleras trabajando lo de la ley 30, nada incluyente como muy solito, los uso en la medida en que me aportan ciertos argumentos para yo poder presentar...”³²

las relaciones entre la acción de base y la institucional quedaron por completo rotas, las acusaciones de un lado al otro no se hicieron esperar, donde la principal diferencia –la cual es prácticamente irreconciliable- tiene que ver con el sentido que se otorga a la acción. Los cambios que persigue la acción colectiva de base tienen que ver con cambios en la adecuación de sentido frente al uso del cannabis, tanto de quienes consumen como de quienes no. Sin embargo las acciones se matizan y complejizan mas

³¹ Entrevista a Julián Quintero López. Acción Técnica Social 2014.

³² Entrevista a Lucas Pasos Abadía, líder activista canábico. 2014

hacia el interior del movimiento, es decir, lo que se pretende es generar cambios en el uso, el consumo, las conductas y la acción socialmente orientada de quienes consumen la sustancia. Esto es lo que ellos denominan la pedagogía del uso que no es otra cosa que generar información sobre los diferentes usos de la planta y las relaciones que se construyen desde el plano intersubjetivo, social y ambiental. Mientras que en el caso de ATS el sentido de la acción se enmarca en la generación de espacios institucionales de incidencia para el cambio de políticas y obtención de recursos.

3.2 ¿Movimientos sociales?: dilemas y desencantos del activismo en Colombia

¿Podemos o no hablar de movimientos sociales cuando hablamos de la acción colectiva de base e institucional? ¿Cuáles son los impactos que consiguen con sus trayectorias de lucha y de qué manera son determinantes los recursos para la obtención de sus propósitos? A continuación presentamos un análisis de los dos casos, que parte de los hallazgos obtenidos a lo largo del proceso investigativo y que pretende dar cuenta de cómo relacionamente puede ser explicado el fenómeno de la acción colectiva en el campo de las políticas que regulan el consumo de drogas en Colombia.

Cuando hablamos de la acción institucional y de base estamos caracterizando dos tipologías que difieren en los fines, medios y trayectorias de lucha para emprender sus propósitos. Sin embargo, si podemos hablar de un campo en común en el cual se dan relaciones objetivas. Según Bourdieu (2005) un campo puede ser definido como una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología etcétera). (Bourdieu, 2005).

Para nuestro caso el campo específico son las políticas que regulan el consumo de drogas en Colombia, donde los actores que componen dicho campo son en primer medida el Estado colombiano, que no sólo detenta el poder de coacción física sino el de la violencia simbólica legítima, es decir, “el poder de imponer como universalmente aplicable (...) un conjunto común de normas coercitivas” (Bourdieu, 2005, p. 169). Sin embargo no es posible considerar a este (el estado) como el único agente inmerso en el campo de las políticas frente al consumo de drogas en el país, también está la sociedad civil como un actor con un capital y un discurso específico que emprende una lucha dentro del campo, nos referimos por supuesto a la sociedad civil organizada tipificada para nuestro análisis en activistas institucionales y de base.

En un primer momento tenemos todo un aparato normativo determinado por el Estado colombiano, el cual regula y ordena la manera como se llevan a cabo políticas, planes y proyectos relacionados con el consumo de drogas, el cual históricamente se ha orientado desde el paradigma de la prohibición del consumo como lo apreciamos en el capítulo 1. Sin embargo esas políticas prohibicionistas han presentado fallos o contradicciones internas, lo que ha generado espacios para la generación de acciones opuestas o alternativas al paradigma de prohibir, esto lo denominamos apertura de oportunidad política.

La teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) sostiene que los movimientos dependen de su entorno exterior, principalmente de las oportunidades políticas, momento en el cual las personas se suman a los movimientos y tras la acción crean nuevas oportunidades.

Dentro de la propuesta de Tarrow (1994) sobre las dimensiones de las oportunidades políticas, consideramos útiles abordar desde nuestro objeto de estudio primero, *el incremento del acceso a la participación*: “los actores racionales no suelen atacar a oponentes bien pertrechados cuando las oportunidades están cerradas, es el acceso parcial a la participación lo que les ofrece los incentivos para hacerlo” (Tarrow, 1994, p. 117). Si entendemos al Estado colombiano encarnado en la legislación y las políticas de

drogas existentes en la actualidad como el oponente, se presenta una oportunidad de acceso a la participación cuando se dan ciertas brechas y contradicciones en las políticas de estado en materia de drogas: Documentábamos al principio de la presente investigación la manera como en el período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) emprendió una lucha frontal contra la dosis mínima de drogas mediante varios actos legislativos para eliminarla, sin embargo, mientras en el plano político esta lucha legislativa se libraba, en el plano técnico y de la salud pública el Ministerio de la Protección Social dio a luz la Política Nacional Para la Reducción Del Consumo de Drogas y su Impacto en el año 2007, carta de navegación en asuntos de consumo de drogas que contemplaba dentro de sus ejes el de la mitigación, es decir, todo lo concerniente al enfoque de reducción del daño expuesto líneas mas arriba. Esto supuso una apertura legal para proponer acciones en salud pública financiadas por el estado que implícitamente aceptan la existencia de consumo de sustancias que son ilegales.

Segundo, *los alineamientos inestables y elites divididas* que son las formas cambiantes de los partidos de gobierno y oposición: luego de varios intentos del gobierno por tumbar la dosis mínima de drogas, hubo una quinta iniciativa que planteaba el problema como un asunto de salud pública, por lo tanto entendía a los consumidores de drogas como enfermos, y en tanto enfermos era necesario un tratamiento profiláctico, era una manera disfrazada de penalizar el consumo mínimo de drogas bajo el rótulo de la salud pública, puesto que quienes fueran sorprendidos con una dosis mínima de drogas serían obligados a entrar en un tratamiento financiado por el estado colombiano. Esto produjo en la ciudad de Bogotá hacia el año 2009 una manifestación en contra de la iniciativa gubernamental llamada “Porte su dosis de personalidad” la cual reivindicaba las libertades individuales no sólo en el ámbito del consumo de drogas. La convocatoria se realizó en la Plaza de Bolívar el jueves 26 de marzo de 2009 con una presencia de centenares de jóvenes, artistas e intelectuales. Lo que sorprendió a organizadores, asistentes y observadores fue la presencia en la Plaza de políticos no sólo de la oposición –que en su momento era el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal- sino a senadores de la coalición de gobierno como Armando Benedetti (Partido de la U) apoyando de manera abierta la defensa de las libertades individuales y de

elección sobre el cuerpo, lo cual significó un triunfo simbólico frente a los ánimos prohibicionistas del gobierno y dio indicios de potenciales aliados políticos ante la reforma a las actuales políticas de drogas.

Tercero, *los aliados influyentes* los cuales están principalmente del lado de la acción colectiva institucional; como mencionábamos líneas mas arriba, son varias las instituciones del estado colombiano las que de una u otra manera han contribuido con el enfoque en reducción de daño con financiación de proyectos, esto ha supuesto un aumento en acciones concretas enmarcadas en miradas alternativas a la prohibición, para el caso de la acción colectiva de base estos aliados son prácticamente inexistentes, lo que supone una limitante para viabilizar acciones concretas y ponerlas en escena dentro del campo de las políticas de drogas.

Finalmente *la represión y la facilitación* es una de las mas fuertes oportunidades políticas en ambas formas de acción colectiva, puesto que no son identificables rasgos del estado que repriman el accionar de cada uno de los casos estudiados, en especial el movimiento canábico, el cual no ha presentado en sus manifestaciones, problemas con el orden público, ni represión por parte de la policía probablemente por los acuerdos manifiestos con las autoridades y la Personería de Medellín como pudimos apreciar en las entrevistas analizadas, además de algunos (acuerdos) tácitos puesto que los consumos de marihuana durante las manifestaciones claramente exceden las dosis mínimas permitidas por la legislación colombiana. Adicionalmente la despenalización del porte y el consumo de la dosis mínima consagrada en la sentencia C-221 de 1994 ha permitido ciertos márgenes de seguridad y maniobra para emprender, no sólo las manifestaciones públicas masivas sino otro tipo de procesos sociales tales como la promoción de los diversos usos de la planta como apreciamos anteriormente y la promoción del autocultivo.

Hay otro aspecto que señala la EOP susceptible de ser analizado y comparado en ambos casos de acción: las amenazas a los intereses, valores, y a veces, la propia supervivencia que diferentes grupos experimentan (Tarrow, 1994). Tarrow sostiene que desde el punto

de vista de la movilización de recursos, será mas probable que participen en la acción colectiva aquellos que tienen menos que perder, ya que poseen mayores recursos. Pero desde el punto de vista de quien intenta atrapar las oportunidades externas, son quienes más tienen que perder, quienes participarán con mas probabilidad, ya que la inacción les resulta mas amenazante. La inactividad en el caso de la acción colectiva de base resulta mas costosa. Desde la cotidianidad, la prohibición del consumo de cannabis produce situaciones incómodas y amenaza a los intereses de los consumidores de cannabis: el estigma, el señalamiento, la exclusión, la patologización y la persecución son algunos de los efectos de la prohibición del consumo, por lo tanto la manifestación y el intento por medio de la acción de generar cambios en las maneras como se da sentido a la planta, es una manera de sortear las amenazas y convertir estas en oportunidades. Situación distinta ocurre en el caso de la acción colectiva institucional, en tanto no está enmarcada la acción en una amenaza directa sino en una postura crítica ante el paradigma prohibicionista, la inacción puede resultar costosa, pero es menos lo que se puede perder respecto al activismo canábico.

Dentro del campo de las políticas frente al consumo de drogas en Colombia encontramos una serie de factores que facilitan o limitan el accionar de la sociedad civil organizada. Tal es el caso de la posición social que ocupan los actores y los recursos disponibles, esto lo denominamos *relaciones objetivas*.

Como lo advierte la teoría de la movilización de recursos TMR, la agregación de recursos requiere una forma mínima de organización, por lo tanto el análisis se debe enfocar en los organizadores. Tanto la acción colectiva institucional como de base cuentan con organizadores que tienen cierto grado de especialización dentro de los subcampos que ocupan, tales como el conocimiento técnico en asuntos de salud pública relacionados con la reducción del daño, los conocimientos sobre la marihuana, sus usos, sus consumos, el activismo y la promoción del autocultivo. Por otra parte, sobre los líderes, podemos advertir que poseen capitales culturales que les permiten estructurar un discurso y emprenderlo en acciones, ya que los organizadores poseen una formación académica profesional. Sin embargo hay una diferencia, tiene que ver con el número de

militantes: mientras que en ATS podemos hablar de un grupo limitado de profesionales que poseen conocimientos especializados en asuntos de salud y drogas, en la CCC tenemos un espectro más amplio: si bien la junta directiva está compuesta por 4 personas, las cuales poseen un nivel de cualificación profesional, la naturaleza del movimiento hace que sus miembros posean diversas características en términos de clases sociales, capital cultural y roles en la sociedad, esto es determinante puesto que hay diferentes niveles de cualificación de la lucha.

Las dos formas de acción detentan diferentes formas de capital que explican el poder de la acción. En ambos casos hablamos de la existencia de un capital cultural, sin embargo su naturaleza es variable: Bourdieu (1987) habla del estado institucionalizado del capital cultural, el cual dentro del campo de la educación es la objetivación del capital cultural en la forma de calificaciones, reconocimientos, títulos y garantías formalmente garantizadas respecto a un autodidacta. Algo similar sucede con la acción colectiva de base y la institucional. La acción canábica posee una suerte de conocimientos adquiridos empíricamente, respecto a la durabilidad del tiempo, conocimientos y trayectorias de lucha que se han construido como una inversión personal de los inversores, pero que no cuentan con un reconocimiento formal, legalmente constituido; mientras que la acción institucional cuenta con el reconocimiento de diferentes estamentos estatales con los cuales entabla relaciones económicas, sociales y políticas en el proceso de tercerización de las labores del estado, lo cual brinda un reconocimiento formal de tales acciones y cualificaciones adquiridas en el trasegar de la acción, lo cual aumenta su capital social y económico entendiendo este último como dinero y derechos de propiedad.

Esta distinción entre capitales culturales también se ve reflejada en el capital social entendido como un agregado de recursos reales o potenciales que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones de conocimiento y reconocimientos mutuos mas o menos institucionalizadas (Bourdieu, 1987). Otro de los postulados de la TMR sostiene que los movimientos no son entidades aisladas sino que interactúan con otras organizaciones como autoridades, partidos, sectores de la sociedad, medios entre otros.

En la descripción del movimiento canábico vimos las interacciones del movimiento (colectivos de usuarios de cannabis, bandas musicales, grupos artísticos entre otros) pero no se evidencia una interlocución directa con otros grupos o asociaciones que detentan poderes políticos o económicos que permitan a la organización obtener recursos materiales que impulsen la lucha, al respecto menciona Ponce de la CCC:

“Los aliados son los medios alternativos independientes” “en relación con la alcaldía de Medellín estuvimos con la mesa de derechos humanos, con el personero hay buenos diálogos, pero es mas desde el respeto con el movimiento por las actividades de la CCC en toda la ciudad”³³.

Por su parte ATS entabla un tipo de relaciones con agentes estatales que explican una mayor obtención de recursos:

“Nosotros trabajamos con circunscripciones administrativas y políticas como las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones juveniles, las alcaldías locales (...) a nivel distrital con la Secretaría de Integración Social, Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, de Gobierno y con otros centros paralelos de estudio e investigación. A nivel nacional trabajamos con el Ministerio del Interior, de Justicia, Protección Social y Educación, antinarcóticos. En los departamentos con los mismos actores, de resto trabajamos mucho con las universidades principalmente la Nacional y la Javeriana (...) es importante resaltar que hay tipos de trabajo que solo los estamos haciendo nosotros en Colombia”.³⁴

El capital social del acción institucional se constituye entonces, en una importante fuente de intercambios materiales (recursos) y simbólicos (estatus) que ayudan a mantener el capital social en sí mismo, es decir, las redes de relaciones que se construyen son producto de estrategias para la creación de relaciones sociales que son usables en el corto o el largo plazo, esto tiene que ver directamente con el impacto de

³³ Entrevista a David Ponce, líder de la Comunidad Canábica Colombiana. 2012

³⁴ Entrevista a Julián Quintero López. Representante legal Corporación Acción Técnica Social. Bogotá 2012.

las formas de acción posprohibicionistas: a mayores recursos obtenidos de una posición social en términos relacionales privilegiada hay mayores impactos sobre la agenda pública.

La tercerización de las funciones del estado en diversos campos de la acción pública ha posibilitado un margen de acción al activismo institucional, puesto que le ha delegado funciones que le son propias y ha permitido que estas adquieran un nivel de especialización técnica considerable, por lo tanto ATS desarrolla la posibilidad de mostrar el camino de cómo deben ser abordadas ciertas acciones en salud pública alternativas a la prohibición. En otras palabras, lo que la acción institucional perfila, es reemplazar al estado en algunas de sus funciones respecto a la regulación del consumo de drogas, brindando una línea técnica acorde con sus enfoques de acción, impactando de manera notoria en la agenda pública, mientras que la acción colectiva de base enfoca sus esfuerzos en realizar un trabajo con la base de la sociedad (consumidora de drogas, en especial de cannabis) que no dialoga de manera directa con el estado y por ende sus recursos e impactos en la agenda pública son limitados o prácticamente inexistentes.

Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos hablar de impactos en la acción de base (podemos hablar de impactos no en términos de la agenda pública pero si desde la producción de sentido), el poder de la movilización crece exponencialmente no siendo la alteración anual del orden público en las calles de la ciudad de Medellín la única acción palpable que demuestre el poder y el impacto del movimiento: los procesos sociales generadores de una cultura canábica se dan desde el propio entorno de los productores de la acción, generando acuerdos simbólicos con el entorno inmediato donde se construye la cotidianidad, el mundo de la vida, dando así solución a problemas relacionados con la interacción con los otros, el estigma, el señalamiento, la penalización del consumo y en consecuencia, la restitución de derechos. Así mismo, el autocultivo, produce un control sobre la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de cannabis dentro del grupo, generando una ruptura de las relaciones que impone el tráfico ilegal de drogas, consecuencia directa de la prohibición de las mismas.

Ambas formas de acción han generado marcos de interpretación de la realidad que han localizado, percibido y nombrado hechos relacionados con la lucha contra la prohibición del consumo de drogas, subrayando condiciones consideradas desafortunadas y redefiniendo situaciones que son identificadas como injustas aunque tolerables en el orden social y en el campo de las políticas contra las drogas. Lo común en estas dos formas de acción es la pretensión de generar cambios en la manera como se entienden las drogas y sus consumos. Desde el acción de base, en la pedagogía del uso de marihuana está el intento por cambiar la percepción acerca de la planta, además de motivar al conocimiento de los diferentes usos de esta como estrategia de resignificación. El principal agravio y situación injusta que se pone de manifiesto en este caso es la persecución por parte de la fuerza pública a los usuarios de la sustancia, así como el estigma, el señalamiento y la exclusión a las que son sometidos por sus hábitos.

Por otra parte desde la acción colectiva institucional hay un intento por brindarle a la sociedad, el estado y la opinión pública en general, mas herramientas técnicas, metodológicas y científicas que permitan alimentar el debate sobre la manera como se aborda el fenómeno del consumo de drogas. Los agravios y las situaciones de injusticia se enmarcan en varios niveles. Primero, en las consecuencias del prohibicionismo sobre la salud pública en términos de los riesgos de las sustancias en un contexto de ilegalidad. Segundo, la prohibición ha supuesto una dinámica de exclusión a los consumidores desde el ámbito social, al igual que las demandas de los usuarios de cannabis, los consumidores de sustancias ilegales son estigmatizados, lo que supone dinámicas de exclusión que desembocan en el aislamiento y la inclusión a prácticas marginales que solo agravan los contextos de consumo al hacerlos clandestinos y fuera de todo tipo de control por parte de las autoridades y actores competentes para hacer frente al consumo. Tercero, la desinformación en general sobre la manera de entender el fenómeno del consumo y las alternativas de intervención frente a un enfoque cuyo fracaso ha sido documentado suficientemente por la opinión pública.

La acción colectiva tanto de base como institucional crea nuevos marcos de significado con elementos que ya se encuentran en la sociedad. Tras el intento del gobierno de Alvaro Uribe por penalizar la dosis mínima en 2009 nuevos marcos reinterpretativos fueron algunas frases y el nombre mismo del evento “porte su dosis de personalidad” haciendo un juego de palabras entre la dosis personal que pretendía ser penalizada y la defensa de las libertades individuales como personalidad. Otro ejemplo de las performances que pretenden crear nuevos marcos de interpretación fue la utilización de la frase “salir del closet” la cual hace referencia al hecho de hacer pública una orientación sexual distinta a la heterosexual. Los integrantes de ATS la volvieron psicoactiva creando un slogan característico de la corporación: “A salir del closet psicoactivo”. Otras frases construidas como estrategia de creación de marcos de interpretación son “ni enfermo ni delincuente, simplemente consumidor de sustancias psicoactivas”, “mi mamá ya sabe” aludiendo al hecho de hacer público el consumo de marihuana o “legalícela usted mismo” promoviendo el autocultivo como estrategia ante la ilegalidad de la planta y la posibilidad que tiene cada usuario de autoabastecerse de la misma.

Por otra parte, las identidades juegan un papel importante en la construcción de la acción en estas formas de activismo, y a nuestro juicio, explican el por qué podemos o no hablar de movimientos sociales en ambos casos. Encontramos grandes diferencias entre la acción de base y la institucional. Mientras que el autorreconocimiento y la autogestión de sus propios procesos sociales *abiertos* a la comunidad usuaria de marihuana recreativa son el principal rasgo de lucha organizada de los primeros, los segundos orientan su acción experta e institucionalizada de forma *cerrada* (dentro del proceso de construcción de la acción colectiva) tendiente a cumplir algunas de las funciones del estado colombiano en salud pública, esto será determinante dentro del proceso de construcción de identidad.

Melucci (1999) entiende la identidad colectiva como un proceso en el cual, los actores producen estructuras cognoscitivas comunes que les permite valorar el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción, donde sus modos de entender la

organización son el resultado de interacciones negociadas por un lado y por el otro, fruto de un reconocimiento emocional (Melucci 1999; Pág 31). Por otra parte esta tiene 3 dimensiones: Primero, La formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, los medios y los ámbitos de acción. Segundo, la activación de relaciones entre los actores quienes interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones y tercero, la realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse.

En ambos casos, las estructuras cognoscitivas y el sentido de la acción se orientan hacia los fines y los medios propuestos (pedagogía del uso-trabajo comunitario con usuarios de cannabis *frente a* reforma a la política de drogas-enfoque de reducción del daño). En el caso de la acción de base, los consumidores de cannabis establecen relaciones y se comunican para adoptar decisiones relacionadas con el activismo, de esta manera entienden los usos de las sustancias y orientan la acción y el discurso hacia la normalización del uso. Sin embargo, este diálogo se da *entre* los militantes del movimiento, es decir, la comunicación y la negociación se da *afuera o mas allá* de los líderes y organizadores del movimiento, quienes entablan el debate con otros. Mientras que la acción colectiva institucional, si bien puede compartir las mismas características de comunicación, negociación y toma de decisiones, estas se dan *al interior de la estructura burocrática* que compone la organización, cuyos resultados y orientaciones de la acción, son presentadas a la sociedad como un modelo de intervención en salud pública, pocas veces modificable o discutible en ámbitos de discusión, puesto que permanece fijo como un modelo de acción avalado institucionalmente por el estado.

En ambos casos encontramos inversiones emocionales, desde luego lo que está en juego es una apuesta ideológica por defender unas posturas abiertamente contrarias al paradigma de la prohibición de las drogas, lo cual trae consigo no sólo la puesta en marcha de un discurso ideológico sino un conjunto de intersubjetividades puestas en marcha mediante la acción, las cuales se diferencian si hablamos de usuarios de cannabis como un grupo cohesionado, con rasgos identitarios arraigados en su orgullo como usuarios de la planta y un grupo de expertos en drogas con un discurso técnico y consistente orientado a la obtención de recursos materiales para emprender la acción.

Es así como llegamos a lo que podríamos denominar identidades *abiertas y cerradas*, es decir, mientras que al interior de la acción de base los militantes de la causa canábica entablan relaciones sociales hacia fuera (escenarios como las calles, las manifestaciones, los cine foros, los talleres de autocultivo, entre otras actividades orientadas a una población dispersa en la ciudad), la acción institucional negocia un reconocimiento cognitivo y emocional de sí mismo al interior de la estructura, para luego plantearlo en un escenario de acción delimitado (Acciones en reducción del daño).

Para Cohen (1985) “los actores colectivos contemporáneos ven que la creación de identidad implica una disputa social alrededor de la reinterpretación de las normas, de las creación de nuevos significados y un desafío para la construcción social de las fronteras entre lo público, lo privado y los dominios políticos de la acción”. (Cohen, 1985, p. 43). En ambos casos la construcción de la identidad implica una reinterpretación de las normas. Esta reinterpretación se traduce en la promoción de una autonomía y el ejercicio de unas libertades individuales, para el consumo de una sustancia considerada “blanda” en el caso de los canábicos y una gestión de los riesgos y daños desde un enfoque de salud pública, para el caso de la acción colectiva institucional. Sin embargo, cabe hacerse una pregunta respecto a la frontera entre lo público, lo privado y los dominios políticos de la acción ¿La apertura o restricción a la generación de nuevas identidades podría ser una variable explicativa para determinar si podemos o no hablar de movimientos sociales?

Melucci advierte que el grado de exposición de un individuo a ciertos recursos (cognoscitivos y relacionales) influye en su posibilidad o no, de entrada en el proceso interactivo de construcción de una identidad colectiva. De este grado de exposición dependen las oportunidades individuales de participación en la negociación de esa identidad y, en particular: a) La intensidad y calidad de la participación de un individuo y b) el punto de inicio y la duración de su compromiso. Por la naturaleza del movimiento canábico la intensidad de la participación es duradera: los usos de la sustancia y su rutinización hacen que la gestión y el compromiso hacia el interior de la

organización sea duradera. La defensa de los derechos de los usuarios y el intento por resignificar las diferentes interacciones del hombre con la planta, hacen que los militantes del movimiento hagan parte protagónica de las acciones colectivas, siendo sus propios usos generadores de identidad. Mientras que por las características de la acción posprohibicionista institucional, las cuales se caracterizan por tener un grado técnico de especialización, las aperturas de espacios de participación activa dentro de la organización son limitadas, esto necesariamente influye en la intensidad y en la calidad de la participación y por ende de la duración y el compromiso. Las posibilidades de influir en la toma de decisiones que orienten la acción son reducidas y no están abiertas a todo tipo de público interesado en influir sobre las políticas de control al consumo de drogas, no sólo es necesaria la experticia sino un capital social que permita llegar a las entrañas que generan la acción. Desde esta limitante para la generación de identidad, hablar de la acción colectiva institucional como un movimiento social es equivocado.

Las luchas en el campo de las políticas de drogas avanzan de manera vertiginosa, con los casos analizados podemos ver, cómo desde la sociedad civil organizada se orquestan diversas formas de acción, que aunque difieren en sus repertorios, número de militantes y recursos, se constituyen en importantes aportes para el debate sobre las alternativas disponibles frente a los fracasos de la actual política antidrogas.

Por otra parte, los impactos no pueden ser expuestos sólo en términos institucionales si nos referimos a los asuntos que están en juego dentro del campo de las políticas de drogas. Si bien, nuestra hipótesis de investigación giró en torno al influjo de la acción colectiva en la agenda pública, con el paso de la investigación hallamos importantes resultados de la acción de base, la cual genera impactos significativos al interior de la organización y de las realidades de sus militantes. Las concurridas protestas y la generación de procesos sociales tendientes a generar una cultura canábica en la ciudad de Medellín son un precedente para el activismo en drogas del país, no solo por el poder que se gesta dentro del movimiento sino por la apertura de espacios para la generación de debate entre la opinión pública además de un acuerdo tácito entre los consumidores, las autoridades y en ciertos espacios, con la comunidad, lo cual supone un avance en

términos del ejercicio de los derechos de quienes toman la determinación de consumir esta planta.

Entonces, los poderes de la acción de la sociedad civil organizada se construyen dentro de múltiples ámbitos que componen las luchas por el dominio simbólico del fenómeno del consumo de drogas. Con nuestros casos vemos como los agentes organizados utilizan múltiples formas de poner en el juego lecturas alternativas frente al paradigma de la prohibición del consumo, demostrando en términos prácticos el poder potencial de la acción en una doble vía: las prácticas de los agentes entendidas como *habitus* (Bourdieu: 1991) funcionan como una *estructura estructurada*, es decir, sus acciones se enmarcan dentro de las condiciones sociales, políticas y simbólicas que impone el campo de las políticas contra el consumo de drogas determinando posibles escenarios, campos de acción y las representaciones sociales para librar las luchas (Apertura de oportunidades políticas, utilización de recursos y sus determinantes sociales, construcción de identidad al interior de la acción). La cual –la *estructura estructurada*– está predispuesta para funcionar como *estructura estructurante*, es decir, como un principio organizador de la acción y de representaciones para buscar el cambio social, político y simbólico (autogestión del consumo, reducción de daños, reforma a la política de drogas, creación de marcos de significado).

Tales acciones tendientes hacia el cambio de paradigma presentan significativos avances en sus luchas. Desde cada uno de sus ámbitos de acción, muestran como se condensa un poder creciente el cual penetra en el campo de las políticas de drogas en un nivel político, técnico, social y simbólico, sin embargo, es aún incipiente y prematuro pensar en un movimiento social en el ámbito del consumo de drogas unificado, robusto, con una propuesta única y consistente. El trasegar de estas dos perspectivas perfila posibilidades muy limitadas de articulación, el enclasmiento de la lucha se constituye en uno de los principales obstáculos.

CONCLUSIONES

Tanto la acción institucional como la de base han aportado cambios frente al paradigma de la prohibición de drogas en Colombia. A pesar de que este enfoque de política sigue siendo el epicentro de las acciones del estado, por medio de la tercerización de sus funciones, AccionTécnica Social ha logrado emprender iniciativas fuera del marco de la prohibición del consumo, impactando de manera alternativa a consumidores de sustancias ilegales y brindándole a la acción de estado nuevas herramientas para enfrentar el fenómeno del consumo desde nuevos ángulos no represivos orientados hacia la reducción del daño. Esto es relativamente reciente en el país y representa un nuevo marco dadas las escasas acciones del estado y del tercer sector en esta dirección.

Por otra parte, la Comunidad Canábica Colombiana como un movimiento social en pleno auge y expansión ha logrado importantes avances en su lucha por reivindicar los derechos de los consumidores no problemáticos de la planta, y a su vez avanza en la generación de acuerdos tácitos con las autoridades y la comunidad no usuaria de drogas orientados hacia la aceptación y la apertura de espacios de generación de opinión. Esto resulta relevante, porque ubica los intereses, acciones y repertorios de una población marginada por el prohibicionismo en un escenario de confrontación con el paradigma dominante, a la vez que al interior del movimiento promueve entre sus militantes opciones reales de maniobra que desafían el tráfico ilegal de estupefacientes, la promoción del autocultivo es muestra de ello.

Los recursos son determinantes para perseguir los resultados esperados de la lucha. En el nivel del impacto sobre la agenda pública el activismo institucional ha mostrado significativos aportes en la ejecución de acciones estatales con miradas alternativas al paradigma de prohibir, esto significa entender el impacto en términos de la influencia que se ejerce sobre la historicidad de la acción estatal en una doble vía: de una parte proponer acciones al estado y cumplir sus funciones desde la experticia técnica y por otra construir nuevos marcos de significado con las poblaciones demandantes de acciones en salud pública alternativas. Así mismo resulta equivocado pensar en la agenda pública como el único impacto posible. A pesar de la limitación que supone el

no acceder a recursos que en sí mismos son limitados, la acción colectiva de base ha construido procesos sociales autónomos respecto al establecimiento y su monopolio de la violencia simbólica legítima, lo que implica impactos periféricos desde las identidades construidas como usuarios en sí y para sí.

Las oportunidades políticas han jugado un papel determinante para construir el poder de estas formas de acción estudiadas: las contradicciones en las acciones gubernamentales entre el discurso ideológico del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y la propuesta técnica del Ministerio de la Protección Social, posibilitó la apertura de espacios para que sectores organizados de la sociedad emprendieran acciones técnicas que son posibilitadas por un modelo de inspiración neoliberal que terceriza las funciones del estado, para este caso, en la puesta en marcha de enfoques de salud pública alternativos a la prohibición del consumo de drogas encarnados en la reducción del daño. Así mismo, marcos legislativos garantistas como la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional que crea la figura de la dosis mínima personal, posibilita la apertura de espectros de acción para que la población consumidora de drogas se organice en torno a sus derechos como usuarios.

No es posible pensar la acción colectiva institucional en términos de tecnocracia. Este concepto supone una visión racionalista, científica y generalizante respecto al funcionamiento del estado, el tecnócrata se constituye en un generalista, distinto a un técnico el cual se especializa en un tema concreto. Esto sucede con Acción Técnica Social, corporación que ha constituido su transcurrir en un conocimiento experto y esto ha contribuido a avanzar en la obtención de recursos materiales y aperturas en espacios de debate y toma de decisiones al interior del estado colombiano.

Los actores que componen ambas formas de acción presentan notables diferencias respecto a cantidades, cualidades y trayectorias: la acción colectiva institucional se constituye en un limitado y cerrado grupo de profesionales cualificados en asuntos de drogas, salud pública y activismo. Mientras que la acción colectiva de base, a pesar de tener líderes cualificados profesionalmente, por su naturaleza y aperturas respecto a la generación de identidad y solidaridad presenta un número considerable de militantes,

los cuales no pueden ser considerados expertos, ni inmersos en el debate sobre las políticas de drogas en Colombia, probablemente este no es su interés, sin embargo en su cotidianidad su militancia ha logrado avances en lo que respecta a sus derechos como consumidores. Por otra parte, en términos discursivos de ambos es posible concluir que no buscan la legalización de las drogas, siendo sus objetivos mas realistas y orientados a cambiar realidades de los consumidores inmediatas (derechos humanos, salud, descriminalización). Sin embargo se distancian en los objetivos que persiguen con su accionar y las relaciones que entablan con otros actores o aliados en procura de sus objetivos. Esto es determinante, pues marca la ruta de sus impactos como formas de acción. En el caso de ATS se orientan hacia la obtención de recursos que permitan emprender acciones relacionadas con la reducción de daños y en el caso de la CCC se busca reivindicar los derechos de los consumidores no problemáticos de marihuana. Sin duda son luchas desiguales al existir una orientación económica de la acción en el primer caso, lo que permite mayor visibilidad, diálogo con el poder estatal e incidencia en las acciones de estado, pero el segundo demuestra el poder de su accionar con la generación de acuerdos simbólicos con la ciudad de Medellín tendientes a la tolerancia y la apuesta por los derechos de los usuarios de drogas, algo que en la cotidianidad impacta sus realidades.

A pesar de que ambas formas de acción comportan actitudes tendientes hacia el activismo, se presentan ciclos de protesta y hay una relativa continuidad en las acciones, no podemos hablar de movimientos sociales en ambos casos. Los miles de movilizad@s anualmente en la marcha de la marihuana en la ciudad de Medellín no son el rasgo principal del activismo canábico como un movimiento social. Es en la generación de identidad, las posibilidades de adherencia de nuevos militantes y la construcción de marcos de significado orientados hacia la defensa de los usuarios de cannabis lo que constituye el activismo de base en un movimiento social. Mientras que la acción institucional, es un conocimiento técnico que ejerce algunas funciones del estado a través de consultorías y en algunos casos activismo en drogas propendiendo por una reforma a las políticas que las regulan. Sin embargo, no se constituye en un movimiento social en tanto existen limitantes para la generación de identidad. Las posibilidades de

generación de acceso a su accionar en términos de la cualificación de la militancia explican tales dificultades.

No es posible hablar de un movimiento social en Colombia que recoja todas las miradas críticas y organizadas respecto a la actual política de drogas en el país. Los casos muestran dos tipologías de acción, con estrategias y modos de representar el fenómeno distintos a pesar de tener un oponente en común. Esto no sólo ha imposibilitado la acción conjunta, sino que ha convertido sus relaciones antagónicas, lo cual puede ser explicado en términos de enclasmiento de las luchas y capital social: mientras el activismo canábico tiene una inspiración de base popular y su interés principal se orienta a cambiar las condiciones de una comunidad de sentido que usa recreativamente una planta ilegal, el activismo institucional pretende acciones alternas en salud pública, con un trasfondo ideológico, pero con una orientación económica de la acción, la cual se posibilita por un diálogo con el estado y organismos internacionales. Sin embargo, estos procesos relacionales son producto del capital social que cada uno de los agentes posee, es decir, de una red de relaciones de conocimiento y reconocimiento, las cuales producen un enfrentamiento por el monopolio de la representatividad de la sociedad civil organizada en torno a las alternativas posibles frente a la prohibición del consumo de drogas en Colombia.

Bibliografía

- Alexander J. (2000) *Sociología Cultural. Formas de clasificación en las sociedades complejas*. México Editorial Anthropos.
- Bell D. (1973) *the coming of post industrial society*. USA Ed. Basic Books Editions.
- Bourdieu P. (2007) *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bourdieu P. (2005) *Una invitación a la sociología reflexiva* / Pierre Bourdieu y Loic Wacquant. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Cohen J. (1985) *Strategy or identity, new theoretical paradigms and contemporary social movements*, *Social Research, An International Quaterly of the Social Sciences*, New York, A. Mack
- Córdova, N. (2011) *La narcocultura: simbología de la transgresión, el poder y la muerte. Sinaloa y la "leyenda negra"*. Culiacán: Universidad autónoma de Sinaloa.
- Courtwright David (2002) "Las drogas y la formación del mundo modern. Breve historia de las sustancias psicoactivas" Ed. Paidós.
- Craig J. & Klandermans B. (1995), *The politics of social protest, comparative perspectives on states and social movements*, Mineapolis, U. of Minesotta Press.
- Delgado R. (2007) *Los marcos de acción colectiva y sus implicaciones culturales en la construcción de ciudadanía*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Del Olmo R. (1992) *¿prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina*. Ed. Nueva Sociedad.
- Escohotado Antonio (1998) *historia de las drogas 2*. Ed. Alianza
- Eisinger Peter. (1972) *The conditions of protest behaviour in American Citizens*. American Political Science Review.
- Estévez A. (2005) *Apuntes para una genealogía de la tecnocracia*. Centro de investigaciones en Administración Pública.

- Fazey, C (1998) *Policy Responses to illicit drugs: an Overview of strategies to reduce demand*. U. 7. Universidad de Londres: Imperial College of Science.
- Fireman B. & Gamson W. (1979) *Utilitarian logic in the Resource mobilization perspective*, en Mayer N. Zald y John D. McCarthy, eds., *The dynamics of Social Movements. Resource Mobilization, social control and tactics*.
- Fisichella D. (1986) *Tecnocracia, algunas ambigüedades conceptuales*, en Bobbio N. y Matteucci N., *diccionario de política*. Barcelona. Editorial Siglo XXI.
- Gamson F. & Rytina (1982) *Encounters with unjust authority* Homewood, Ill., Dorsey Press.
- Heather N. & Nadelman E. (2004) *La cultura de las drogas en la sociedad del riesgo*. Publicaciones Group Igia. Barcelona 2004.
- Jelsma M. (2003) *Drugs in the UN System: The Unwritten History of the 1998 United Nations General Assembly Special Session on Drugs* en *The International Journal of drug Policy*.
- Kriesi, Hans Peter (1999) *La estructura de organizacional de los nuevos movimientos sociales en su contexto político* en McAdam, Doug; John McCarthy y Mayer Zald. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid Editorial Istmo. Madrid.
- La prevención en manos de las y los jóvenes (2010). *Herramientas pedagógicas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y mitigación del impacto para líderes de organizaciones juveniles*. Ministerio de la Protección Social- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.
- Leal F. (1989) *Estado y política en Colombia*, Bogotá. Siglo Veintiuno editores CEREC
- Leal F. (1989) *el sistema político del clientelismo* en *Análisis político*, No. 8, Septiembre – Diciembre, 1989.
- Lematrie R. y Albarracín C. (2010) “*Patrullando la dosis personal: la represión cotidiana y los debates de políticas públicas sobre el consumo de drogas ilícitas en Colombia*” en *Libro blanco de las drogas*. Bogotá Universidad de los Andes.
- McCarthy J. (1999). *Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades*. en: McAdam, Doug; John McCarthy y Mayer Zald. *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid Editorial Istmo.

- McCarthy J. y Mayer Z. (1977) "*Resources Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*", en: *The American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6.
- Melucci A. (2002). *Accion colectiva, vida cotidiana y democracia*. Mexico. El Colegio de Mexico.
- Múnera L. (1998) *Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988*. Bogotá IEPRI
- Nelkin D. (1987) "*Science, Technology and Public Policy*", history of Science Society Newsletter, Volume 16, No. 2 April
- Olson, Mancur. (1965) *The logic of collective action*. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Pizzorno A. (1978) *Intercambio político e identidad colectiva en el conflicto industrial en C. Crouch y A. Pizzorno eds. el resurgimiento del conflicto de clase en la europa occidental desde London. MacMillan*.
- Pudal B. (2011) Los enfoques teóricos y metodológicos de la militancia. Bogotá Revista de sociología.
- Puricelli Sonia (2005). *La teoría de movilización de recursos desnuda en América Latina*. Red Internacional de Investigaciones. Argentina Editorial Theomani.
- Putnam R. (1977) *Elite transformation in industrial advanced societies: an emprirical assessment of the theory of technocracy. Comparative political studies*, October, Vol 10 No3. Sage Publication.
- Rivas, A. (1998). *El análisis de marcos: Una metodología para el estudio de los movimientos sociales* en P. Ibarra y B. Tejerina. *Los movimientos sociales*. Madrid, Editorial Trotta.
- Rubio M (1999). *Crimen e impunidad: precisiones sobre la violencia*, Bogotá. Tercer Mundo CEDE.
- Schwartz M. & Shuva P, (1992) *Resource mobilization versus the mobilization of people, why consensus movements cannot be instruments of social change* , in Morris Aldon D. & Mac Clurg Mueller Carol (eds), *Frontiers in social movement theory*, New Haven & Londres, Yale University Press.
- Smelser N. (1962) *Theory of collective behaviour*. New York, Free Press.

- Snow D. & Bendford R. (1988) *Ideology, frame resonance and participant mobilization*. En Klandermans, B Kriesi, H.P. y Tarrow (eds) *International Social Movements Research 1*. Greenwich, CN: Jai Press.
- Tarrow S. (1994) *El poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid. Alianza Universidad.
- Thoumi F. (2002) *El imperio de la droga Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes*. Ed. Planeta. 2002
- Thoumi F. y Jelsma (2008) *la normatividad internacional sobre drogas: soporte al paradigma prohibicionista*, en Rangel A. *la batalla perdida contra las drogas. ¿Legalizar es la opción?*. Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia.
- Touraine Alain (2006) “*los movimientos sociales*” en Revista Colombiana de Sociología No. 27 .
- Touraine Alain (1987). *El regreso del actor*. Argentina. Ed. Universitaria de Buenos Aires.
- Uprimmy Yepes Rodrigo, Diana Esther Guzmán, Jorge A. Parra Norato (2013). *Penas alucinantes. La desproporción de la penalización de las drogas en Colombia*. Bogotá. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.
- Uprimmy, Guzman, Parra y Bernal (2014). *Políticas frente al consumo de drogas de uso ilícito en Colombia en En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina. CEDD*
- Weber Max (1964). *Economía y Sociedad Esbozo de sociología comprensiva*. Mexico. Ed. Fondo de Cultura Económica.
- Weber Max (1972) *Ensayos de sociología contemporánea*. Ediciones Barcelona.
- World Health Organization (1974) *Expert Committee on Drug Dependence: Twentieth Report, Technical Report Series 55 1*. Geneva.
- World Drug Report* (2014) United Nations Office on Drugs and Crime.

Otras Fuentes

Entrevistas citadas

David Ponce. Marzo 24 de 2012. Medellín.

Julián Quintero López. Febrero 20 de 2012. Bogotá.

Lucas Pasos Abadía, Febrero 28 de 2014. Bogotá.

Periódicos

Agenda Bogotá. (4 de mayo de 2012). “Tenemos un movimiento social marcha de la marihuana”. *Agenda Bogotá*. Recuperado de <http://www.agendabogota.com.co/2013/05/06/tenemos-un-movimiento-social-marcha-de-la-marihuana-bogota-4-de-mayo/>

El Espectador. (13 de Julio de 2012). “Consejal denuncia que se prestó el Simón Bolívar para consumir marihuana”. *El Espectador*. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/concejal-denuncia-se-presto-el-simon-bolivar-consumir-m-articulo-359536>

<https://www.facebook.com/marchamundial.procannabica?fref=ts>

Anexos



Imagen 1. Pieza comunicativa en reducción de riesgos frente al consumo de Alcohol. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá. Proyecto Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza.



Imagen 2. Pieza comunicativa en reducción de riesgos frente al consumo de bazuco. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá. Proyecto Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza.



Imagen 5. Pieza comunicativa en reducción de riesgos y daños frente al consumo de LSD. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá. Proyecto Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza.



Imagen 6. Pieza comunicativa en reducción de riesgos y daños frente al consumo de heroína. Corporación ATS.

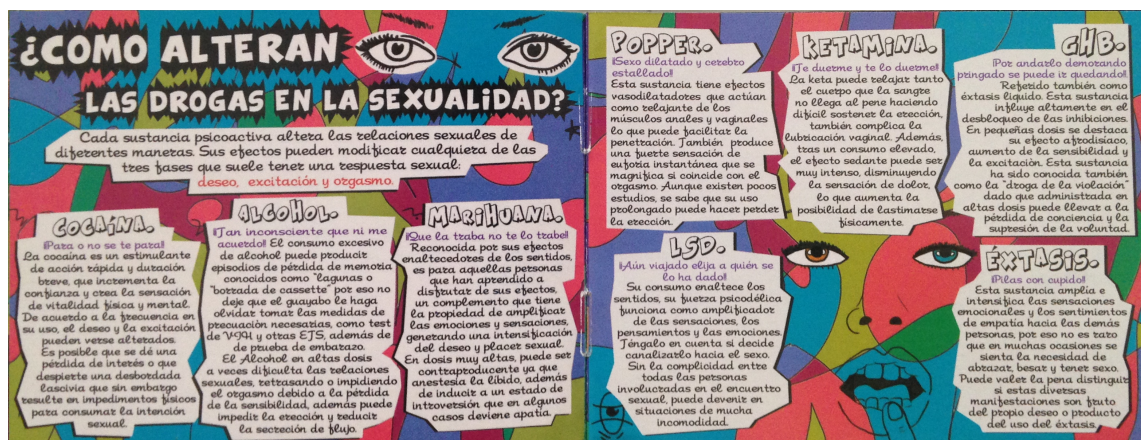


Imagen 7. Pieza comunicativa en reducción de riesgos y sexualidad. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 8. Pieza comunicativa en reducción de riesgos y sexualidad. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 9. Pieza comunicativa sobre convivencia en espacios de ocio nocturno. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 10. Pieza comunicativa en reducción de riesgos y daños en consumo de cocaína. Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 11. Pieza comunicativa sobre reducción de riesgos y daños en consumo de alcohol Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 12. Pieza comunicativa sobre reducción de riesgos y daños en consumo de alcohol Corporación ATS. Secretaría de Salud de Bogotá



Imagen 13. Activistas Bogotános en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 14. Activistas canábicos concentrado en la Plaza de Bolívar en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 15. Activistas Bogotáños en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 16. Activistas Bogotáños en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 17. Activistas Bogotáños en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 18. Activistas canábico en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 19. Activistas Bogotános en la marcha de la marihuana concentrado en la Plaza de Bolívar, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 20. Activistas Bogotános concentrados en el Planetario Distrital en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 21. Activistas Bogotános en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 22. Activistas Bogotános en la marcha de la marihuana, población LGBTI. Mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 23. Logo de la Marcha Mundial Canábica 2013. Bogotá. Fuente: Facebook



Imagen 24. Activistas Bogotáños en la marcha de la marihuana, mayo de 2013. Fuente: Facebook.



Imagen 25. Marcha de la Marihuana 2013 en la ciudad de Medellín. Fuente: Página oficial de la Comunidad Canábica Colombiana en Facebook.



Imagen 26. Marcha de la Marihuana 2013 en la ciudad de Medellín. Fuente: www.vanguardia.com



Imagen 27. Marcha de la Marihuana 2014 en la ciudad de Medellín. Fuente: sitio oficial en facebook de la CCC



Imagen 28. Marcha de la Marihuana 2014 en la ciudad de Medellín. Fuente: sitio oficial en facebook de la CCC



Imagen 29. Cartel objetivo # 1 de la Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 30. Cartel objetivo # 2 de la Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 31. Cartel objetivo # 3 de la Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 32. Cartel objetivo # 4 de la Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 33. Afiche oficial Marcha Mundial de la Marihuana Medellín 2014. Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 34. Afiche oficial Marcha Mundial de la Marihuana Medellín 2014. Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 35. Afiche segunda bicicletada canábica Medellín 2013. Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 36. Afiche primera bicicletada canábica 2012. Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 37. Marcha de la Marihuana 2012. Medellín Comunidad Canábica Colombiana



Imagen 38. David Ponce, uno de los líderes de la Comunidad Canábica Colombiana.